

RV: Apoderado Rama Judicial con todo respeto remite Contestación de demanda: Rad 033-2022-00329.


Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C.

Mar 20/06/2023 3:20 PM

Para: Juzgado 33 Administrativo Sección Tercera - Bogotá - Bogotá D.C.

<jadmin33bta@notificacionesrj.gov.co>

CC: Jesus Gerardo Daza Timana <jdazat@deaj.ramajudicial.gov.co>

 4 archivos adjuntos (4 MB)

% Contesta dda Johana Cardenas Hurtado, deber de cuidado.pdf; Poder Johana Cardenas Hurtado DEAJALO23-5741_8.pdf; ANEXOS DE PODER Dra Belsy Yohana.pdf; 3. Delgacion representación judicial 5393.pdf;

Cordial saludo,

De manera atenta informamos que ha sido radicado el presente correo como memorial para el proceso relacionado en el mismo, dentro del registro en el aplicativo siglo XXI podrá confirmar los datos del mensaje como Asunto, fecha y hora de recibo.

Atentamente,

**Grupo de Correspondencia
Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos
Sede Judicial CAN**

CAMS

De: Jesus Gerardo Daza Timana <jdazat@deaj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: martes, 20 de junio de 2023 15:17

Para: Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C. <correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Angie Lisseth Guerrero Cardozo <aguerrerca@deaj.ramajudicial.gov.co>; procjudadm82@procuraduria.gov.co <procjudadm82@procuraduria.gov.co>; EDWIN MAHECHA <Notificaciones.Bogota@mindefensa.gov.co>; deval.notificacion@policia.gov.co <deval.notificacion@policia.gov.co>; Luis Alberto Bustos Perdomo <notificacionesjudiciales@cali.gov.co>; juridica <juridica@defensoria.gov.co>; MILENA MARTINEZ <notificaciones@inpec.gov.co>; DECUN COMAN <decun.coman@policia.gov.co>; notificaciones@legallgroup.com.co <notificaciones@legallgroup.com.co>; procesosnacionales@defensajuridica.gov.co <procesosnacionales@defensajuridica.gov.co>; Jesus Gerardo Daza Timana <jdazat@deaj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Apoderado Rama Judicial con todo respeto remite Contestación de demanda: Rad 033-2022-00329.

Bogotá D. C., junio 20 de 2023.

Doctora
LIDIA YOLANDA SANTAFÉ ALONSO

Juez Treinta y Tres (33) Administrativa de Bogotá - Oralidad
Sección Tercera
E.S.D.

Radicación: 11001-33-36-033-202200329-00.
Medio Control: Reparación Directa
Demandante: Johana Cárdenas Hurtado y Otros.
Demandado: Nación – Rama Judicial, Instituto Nacional Penitenciario INPEC.

En mi calidad de apoderado de la Nación Rama Judicial en el proceso de la referencia, con todo respeto remito: contestación de demanda, poder y anexos.

De la Señora Juez,

Jesús Gerardo Daza Timaná
CC No. 10'539.319 de Popayán
TP No. 43. 870 del CSJ
Cel: 320 -4685184.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.



DEAJALO23-7134
Bogotá D. C., junio 20 de 2023.

Doctora

LIDIA YOLANDA SANTAFÉ ALONSO

Juez Treinta y Tres (33) Administrativa de Bogotá - Oralidad

Sección Tercera

E.S.D.

Radicación: 11001-33-36-033-202200329-00.
Medio Control: Reparación Directa
Demandante: Johana Cárdenas Hurtado y Otros.
Demandado: Nación – Rama Judicial, Instituto Nacional Penitenciario INPEC.

JESÚS GERARDO DAZA TIMANÁ, identificado con la cédula de ciudadanía No 10'539.319 de Bogotá, titular de la tarjeta Profesional No 43.870 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado de la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en el proceso de la referencia, según poder que adjunto, estando dentro del término legal, procedo a contestar la presente demanda y proponer excepciones, en los siguientes términos:

1.- A LAS PRETENSIONES

Me opongo a todas las declaraciones y condenas solicitadas en la presenta demanda instaurada contra la Nación – Rama Judicial por un presunto daño especial atribuido a la Rama Judicial por una presunta omisión de protección, por el fallecimiento del menor quien contaba con 15 años de edad: L.F.M.Q, por recluso a quién se le concedió permiso de salida.

2.- A LOS HECHOS

Los hechos 2.2.1 al 2.2.5 es parcialmente cierto por estar relacionado con las condiciones familiares del menor **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D)**. Los hechos 2.2.6 al 2.2.15 son parcialmente ciertos por estar relacionados con las difíciles situaciones de orden público que se observa el sector de Llano Verde en las que ha intervenido la Alcaldía la Personería y la Defensoría del Pueblo de Cali. Los hechos 2.2.16 al 2.2.32 son parcialmente ciertos por estar relacionado con notas



periodísticas de la noticia criminal de los diferentes medios hablados y escritos, sin que dicho despliegue periodístico haya sido autorizado por la Rama Judicial. Los hechos 2.2.33 al 2.2.35 son parcialmente ciertos por estar relacionados con los preacuerdos y las sentencias de condena. Los hechos 2.36 al 2.2. 40 son parcialmente ciertos por estar relacionados con el aporte de la Fiscalía de los diferentes elementos materiales probatorios: informes ejecutivos de investigación, necropsia, versiones, informes de investigación de campo, incluida una canción. Los hechos 2.2.42 son parcialmente ciertos por cuanto se refieren al daño antijurídico causado con el deceso del menor LC:H, (QEPD), por lo que las entidades demandadas deben ser declaradas extracontractualmente responsables. El hecho 2.2.42 es parcialmente cierto por hacer alusión a la omisión de los deberes constitucionales y legales de las entidades demandadas. El hecho 2.2.43 es parcialmente cierto por cuanto no se agotó el requisito de procedibilidad, toda vez que, se radicó la petición el 5 de agosto de 2022, en la que el término feneció de los 3 meses sin que se citara para la audiencia, por lo que se entiende agotado dicho requisito por vencimiento del término, sin que se evidencie por la parte actora solicitud alguna solicitando la realización de la audiencia. El hecho 2.2.44 es parcialmente cierto por cuanto hace alusión al daño causado por las entidades demandadas el cual deber ser indemnizado. La Rama Judicial no está de acuerdo con la falla en el servicio ni los perjuicios reclamados.

3.- ANTECEDENTES

Los hechos más relevantes de la demanda los resumo en los siguientes términos:

2.2.1. El menor de edad Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.), quien se identificaba con el NUIP 1.028.186.826; nació el día 28 de diciembre del año 2005 en el Distrito de Buenaventura, bailar música urbana y jugar fútbol con sus amigos²⁹ era lo que le gustaba hacer, su sueño era ser futbolista³⁰. Para el día once (11) de agosto del año dos mil veinte (2020) en el cual perdió abruptamente la vida, contaba con 14 años de edad y residía con su familia en el Barrio Llano Verde.

2.2.2. El menor de edad Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.) era hijo biológico de la señora Johana Cárdenas Hurtado identificada con la C.C. 1.028.186.553. Dicha situación se acredita con la copia del registro civil de nacimiento del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**³¹.

2.2.3. El menor de edad Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.), para el momento de su fallecimiento tenía los siguientes hermanos: Víctor Alfonso Cárdenas Hurtado, identificado con el NUIP 1.143.955.020; Darwin Camilo Cárdenas Hurtado identificado con el NUIP 1.143.994.704; Brayan Cárdenas Hurtado, identificado con el NUIP 1.143.982.959; Marolyn Tatiana Cárdenas Hurtado, identificada con la



tarjeta de identidad 11.143.982.991 y Yari Camila Cárdenas Hurtado, identificada con el NUIP 1.234.200.314. Tal situación se acredita con la copia simple del Registro Civil de Nacimiento de Nacimiento de los demandantes antes mencionados, así como también con el Registro Civil de Nacimiento de nacimiento del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**32.

2.2.4. El menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, para el momento de su deceso tenía tres (03) tíos, a saber: los señores Yeison, identificado con la C.C. 1.028.186.554; Luis Eduardo identificado con la C.C. 1.028.186.864 y Francia Elena Cárdenas Hurtado identificada con la C.C. 1.028.186.868 acuden a esta instancia invocando su calidad de tíos del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, situación que se acredita con la copia simple del Registro Civil de Nacimiento de Nacimiento de los demandantes antes mencionados, así como también con el Registro Civil de Nacimiento de nacimiento de la señora Johana Cárdenas Hurtado 33.

2.2.5. El menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, para el momento de su deceso tenía una abuela, la señora Martha Hurtado Cárdenas identificada con la C.C. 31.610.052, dicha situación se acredita con la copia simple del Registro Civil de Nacimiento de la señora Johana Cárdenas Hurtado 34.

2.2.6. El trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) la Defensoría del Pueblo en escrito dirigido a la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial para respuesta rápida a las alertas tempranas (CIPRAT) consignó lo que a continuación se relaciona, ante lo cual, resulta pertinente poner de presente que el Barrio Llano Verde pertenece a la comuna 15 de Santiago de Cali / Valle del Cauca: “(...) **Referencia: Alerta Temprana, de Inminencia, N° 085-18, para los habitantes de las comunas 14, 15 y 21 de la ciudad de Santiago de Cali, departamento Valle del Cauca; para que se adopten las medidas urgentes destinadas a salvaguardar la vida e integridad personal de la población civil, en especial de los pobladores de los barrios: Potrero Grande, Valle Grande y Desepaz Invicali; al igual que Llano Verde, El Retiro y Los Comuneros.**

(...) De manera atenta, y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2124 de 20171, me permito remitir la Alerta Temprana de la referencia, debido al inminente riesgo al que se exponen los moradores de los barrios pertenecientes a las comunas 14, 15 y 21 de la ciudad de Santiago de Cali (...)

La población en situación de riesgo habita en los barrios: (...) Llano Verde (...) de la comuna 15 (...).



Las comunas mencionadas presentan o comparten similares condiciones de vulnerabilidad social, expresada en altos niveles de pobreza, desplazamiento forzado, desplazamiento intraurbano, falta de oportunidades laborales, Necesidades Básicas Insatisfechas, limitada presencia estatal en seguridad y una baja prestación de servicios sociales, que en la actualidad han convertido a estos territorios en un escenario de interés para los grupos armados ilegales o de delincuencia organizada, propicio para su accionar, que se valen de estas particularidades, para penetrar e imponer diversas formas de control sobre estas zonas de la ciudad de Cali (...) quienes han sido objeto de atentados, homicidios y amenazas.

Dentro de las comunas mencionadas, los barrios citados arriba son los que presentan más riesgos por tener altos índices de homicidios, hurtos, extorsión, desplazamiento, venta y consumo de sustancias psicoactivas, riñas, la presunta presencia de grupos armados organizados y amenazas a sus habitantes.

El escenario de riesgo se configura por la presencia de presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencia de las FARC-EP, quienes se autodenominan: Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), cuyo interés es el control del territorio urbano, aprovechando las condiciones de vulnerabilidad social de los habitantes de los barrios referenciados en este documento.

Se remite la presente Alerta Temprana de Inminencia, con el propósito de que se adopten medidas de prevención y protección urgentes y efectivas para salvaguardar la vida, la libertad, la integridad personal, los derechos civiles y políticos y el DIH de esta población geográficamente referenciada en este documento.

I. Antecedentes

Las comunas señaladas y ubicadas al oriente de la ciudad, están relacionadas por padecer problemáticas similares heredadas del conflicto armado y aunadas al desplazamiento forzado que durante años han vulnerado los derechos de sus habitantes provenientes de la costa pacífica nariñense y caucana, el norte del Cauca, Buenaventura, y de otros barrios de la ciudad. (...)

Las dinámicas económicas se recargaron a las prácticas ilegales de los grupos que habían cooptado y que ahora dominaban, y desarrolladas con las estructuras del narcotráfico. Es así que para los grupos armado presentes esta zona de Cali se ofrecía como un espacio propicio para establecer diversas formas de su accionar delictivo, dadas sus características en el desarrollo económico, industrial y su importancia comercial, y por ser receptora del puerto más importante del pacífico, Buenaventura. (...)



Las características socioeconómicas de la población asentada en estas comunas de oriente, contrastan incomprensiblemente con el desarrollo comercial y económico de la ciudad, como la falta de oportunidades laborales o la informalidad de sus empleos, han venido aumentando la vulnerabilidad de sus habitantes, sumado a ello una limitada presencia estatal en seguridad y una baja prestación de servicios sociales no reflejados en inversión social, proyectos y programas sociales que redundaran en favor de estas comunidades. (...)

(...) la comuna 15 ha sido un territorio golpeado por la violencia en donde sus habitantes han visto vulnerados sus derechos constantemente, la situación de conflicto estuvo protagonizada por milicias populares las FARC-EP concentrados con mayor intensidad en la zona de Marroquín, en el distrito de Agua Blanca, igualmente pandillas juveniles, grupos de limpieza social, bandas de distribuidores de droga y de sicarios. Las anteriores características y la ausencia del dialogo y la conciliación, han conservado un ciclo de violencia en la comuna, en el que un contexto cargado de factores negativos como, la marginalidad, las condiciones socioeconómicas, la falta de oportunidades, la salud, la educación, la vivienda y el desempleo no permite la superación de vulnerabilidades, por el contrario las amenazas son cada vez mayores, si se tiene en cuenta que las practicas delincuenciales mutaron a unas más estructuradas y difíciles de rastrear, y que a su vez generan más daño a los habitantes. (...)

II. Escenario Actual

(...) En una gran mayoría un porcentaje importante de los habitantes en las comunas 14, 15 y 21 de Cali, se caracterizan por tener la condición de víctimas del conflicto armado (...) En los barrios de las comunas referenciadas las comunidades se ven expuestas a conductas vulneratorias de derechos humanos, desde hurtos hasta homicidios, en su mayoría perpetrados por bandas criminales, presuntamente integradas por personas que hicieron parte del proceso de dejación y reincorporación, pero que hoy han decidido volver a delinquir; y otros que definitivamente se declararon en disidencia y continuaron ejerciendo el trabajo que adelantaban con las milicias, y cuyo objetivo era la expansión territorial y control sobre las redes en el negocio ilegal del narcotráfico y de otras actividades ilegales, ahora aprovechando el espacio dejado por los desmovilizados. (...)

La zozobra que se funda alrededor de los líderes sociales por el miedo a ejercer labor social y la tensión en los habitantes que tienen conocimiento de la presencia de estos grupos en los barrios, y la incertidumbre de saber que en cualquier momento pueden presentarse enfrentamientos entre estos, mantiene en vilo a la comunidad. Las amenazas se reafirman en los últimos días como se dio a conocer



con la siguiente nota: “Circulan amenazas de ‘Gaitanistas’ en Valle del Cauca. El documento, que es presentado como un comunicado a la opinión pública y que inicia con un encabezado que reza ‘Por una Colombia Madre Patria para todos’, señala que las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (AGC) ya han empezado el exterminio de ratas izquierdistas, activistas de derechos humanos y del proceso de paz, líderes indígenas, miembros del Congreso de los Pueblos, sindicalistas y colaboradores de la guerrilla”. (...)

De acuerdo con las cifras, durante el primer semestre de 2018, se presentaron 600 homicidios, 23 más que en el mismo periodo de 2017, en donde se registraron 577 casos, representando un incremento de 3.99%. Lo anterior hizo que las autoridades se volcaran en el estudio de la problemática en el sector y posibles métodos de apaciguar la violencia.

Ahora bien, en el periodo comprendido entre enero-junio de 2018 las comunas que registraron incrementos en el número de homicidios fueron las comunas 14, 8, 7, 10, 6, 17, 18, 3, 16, 20, 5 y 12. Se destaca el caso de la comuna 14 donde, en este primer semestre de 2018 se han registrado 63 homicidios, es decir 18 más de los 45 perpetrados en el mismo periodo de 2017.

La comuna 15 está compuesta por nueve barrios, tres urbanizaciones y sectores, su población se calcula en 159.369 habitantes aproximadamente. Esta comuna posee 948 manzanas, establecimientos educativos 53, con un total de 10.551 estudiantes matriculados. Estaciones de policía 1 y Centros de Atención Inmediata ninguno.

Ubicada en una de las zonas más excluidas de la ciudad de Cali, en la comuna 15 se encuentran barrios como Llano Verde (...)

Las condiciones de vulnerabilidad social se relacionan con fenómenos similares a los ya expuestos para las comunas 14 y 15 como: la inseguridad, el tráfico de estupefacientes, comercio ilegal de armas y explosivos, presencia de pandillas, los hurtos y los atracos. Los menores de edad son utilizados en las redes asociadas con el negocio ilícito de narcotráfico al menudeo, la prostitución y el sicariato, cuyos integrantes hacen parte de grupos delincuenciales dedicados a la extorsión a comerciantes, al cobro de exacciones a cambio de “protección” y al cobro excesivo de intereses por los préstamos del sistema llamado “gota a gota”.

Ante todos estos actos que atentan contra los derechos humanos, los habitantes piden presencia constante de la autoridad con el fin de que les brinden seguridad, o reclaman la reubicación de sus viviendas como una salida a sus precarias condiciones. (...)



Para la comuna 15 la estadística nos dice que; para el año 2017 se registraron un total de 154 homicidios, y para el año 2018 aparecen 61 casos registrados. La suma arrojó un total de 215 casos, en donde 197 se perpetraron en contra de hombres y 18 en contra del género femenino.

Grafica

Las comunas descritas han venido durante largo tiempo concentrando el mayor número de homicidios y aunque a la fecha se registran menos casos en relación al año inmediatamente anterior, la zozobra se cierne sobre sus habitantes

Así, a partir de las descripciones anotadas es posible prever que existe un inminente escenario de riesgo para la población civil que habita los barrios (...) Llano Verde, Los Comuneros, Mojica y El Retiro de la comuna 15 (...) que dicha población pueda ser objeto de múltiples violaciones de derechos fundamentales e infracciones al Derecho Internacional Humanitario- DIH, por medio de amenazas, métodos para generar terror en la población civil como panfletos, llamadas, mensajes en redes sociales, correos electrónicos, etc.; asesinatos selectivos, desplazamientos individuales y masivos, y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes, restricciones a la movilidad, confinamientos, violencia sexual y afectaciones de la población civil como efecto indiscriminado de las acciones bélicas, entre otras. Tal escenario se confirma por la presencia de presuntos integrantes de grupos armados ilegales como son; el ejército de liberación nacional (ELN), el grupo declarado en disidencia de las FARC, Guerrillas Unidas del Pacífico, y las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que igualmente bajo la práctica de instrumentalización, estarían violando los derechos a esta población.

(...)

Los habitantes de las tres comunas monitoreadas, exigen la implementación de programas sociales y la presencia de instituciones que enriquezcan el panorama social de las comunas, pues el fenómeno delincriminal y de violencia crece ostensiblemente, por lo tanto se requiere de un especial acompañamiento psicosocial y comunitario, de acciones localizadas que permitan prestar los elementos educativos correctos, que se facilite la integración vecinal y la construcción de bases de convivencia contra la imposición de fronteras imaginarias y la ilegalidad, y que las necesidades básicas sean verdaderamente intervenidas a fin de desplazar las afectaciones que han conducido a esta población al desastre. Así entonces, mientras la ciudad de Santiago de Cali continúe siendo el eje geopolítico del narcotráfico del sur occidente colombiano y las prácticas delincuenciales no encuentren freno en las autoridades; y las dinámicas de una



población desplazada se encuentren rodeadas de vulnerabilidad, no se apreciarán cambios sustanciales en la superación de sus afectaciones.

Por todo lo anterior, de no tomarse las medidas de respuesta rápida podrían materializarse los escenarios de riesgos anteriormente descritos, por lo tanto, se hacen las siguientes recomendaciones.

III. Recomendaciones

De acuerdo a la situación de riesgo indicada, se solicita a la Secretaria Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), coordinar e impulsar las medidas preventivas y de reacción rápida ante los factores de riesgo advertidos por la Defensoría del Pueblo, de modo que las autoridades competentes adopten de manera urgente las medidas necesarias y pertinentes para prevenir los riesgos y amenazas.

*A la alcaldía de Santiago de Cali y a la Gobernación del Valle, en coordinación con la Fuerza Pública, **implementar medidas de protección para garantizar la vida, libertad e integridad de la población civil que se ubica en los barrios pertenecientes a las comunas 14, 15 y 21, con el fin de evitar las acciones sicariales, extorsiones, amenazas de muerte, afectaciones a la población civil como consecuencia de acciones bélicas** y las demás acciones violentas de los grupos armados ilegales, y garantizar la seguridad, libre movilidad e integridad a la población civil.*

3. A la alcaldía de Santiago de Cali y la Gobernación del Valle en coordinación con la policía metropolitana de Cali, la implementación de cámaras de seguridad en los barrios y zonas registradas en este documento.

4. A la Alcaldía de Santiago de Cali en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, implementar medidas que restrinjan el porte de armas de fuego en los barrios geográficamente descritos en este documento, fortalecer los recursos logísticos de las unidades de Policía ubicadas en esas zonas y reforzar los patrullajes en horas nocturnas, con el objetivo de hacer efectivas las restricciones al porte de armas de fuego.

5. A la alcaldía Municipal de Cali en coordinación con la Personería Municipal y la UNP, para que se evalúe de manera urgente la situación de los líderes comunitarios, así mismo implementar medidas efectivas para proteger la vida y la integridad física de la población señalada en riesgo y que estas medidas sean establecidas en consulta con las víctimas de manera individual y colectiva. Se sugiere la activación de espacios de coordinación institucional, encabezados por la alcaldía municipal en



cada comuna para que se promueva de manera articulada y eficaz las medidas individuales y colectivas de protección. Se solicita, además, diseñar y aplicar medidas de protección individual y colectiva, especialmente orientadas a personas de especial protección constitucional en situación de vulnerabilidad, como las comunidades afrocolombianas y desplazadas.

6. A la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas - CIPRAT del Ministerio del Interior, apoyar la coordinación de la respuesta estatal en materia de prevención y protección por parte de las autoridades concernidas en el presente documento.

7. A la alcaldía Municipal de Cali y la personería municipal, implementar espacios de dialogo con las organizaciones de derechos humanos en las comunas descritas para identificar problemas potencialmente generadores de violación a los derechos humanos, así como requerir a las autoridades competentes la activación y concertación de medidas de protección de carácter colectivo, tendientes a neutralizar o mitigar el riesgo. (...)

10. A las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, se recomienda diseñar y ejecutar operaciones de registro y control permanente, para contrarrestar la acción violenta de los grupos armados al margen de la ley que afectan a los pobladores de las zonas descritas en amenaza en el municipio de Santiago de Cali, tendientes a garantizar los derechos a la vida, la integridad, libertad personal y la libre movilidad de la población civil entre otros. Procurar en conjunto con la administración municipal, un plan desarme en las comunas afectadas.

11. A las autoridades civiles y a la Fuerza Pública, informar de manera periódica a la Dirección del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, las actuaciones y medidas adoptadas con respecto a las recomendaciones formuladas en la presente advertencia conforme a lo previsto en la Corte Constitucional y la Ley 24 de 1992. Dicha información deberá ser allegada según lo estipulado en el artículo 15 y subsiguientes de la Ley 24 del 15 de diciembre de 1992, en concordancia con el Decreto 2124 (...). Subrayado y negrilla propio.

2.2.7. De conformidad con el acta de reunión No. 4161.010.3.2. de cuatro (04) de agosto de dos mil veinte (2020) de la secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Santiago de Cali / Valle del Cauca cuyo objetivo era: *“Realizar Jornada de trabajo con la Mesa Distrital de Participación Efectiva de Víctimas”* (Virtual), se consignó lo siguiente: “(...)



□ La lideresa Norma García solicita la palabra y comentó que terminando el año 2017 e iniciando el 2018 **surgen una serie de amenazas que fueron reportadas de manera oportuna pero que, a pesar de esto, no han recibido, hasta la fecha, una respuesta oficial.** Manifestó que es importante resaltar que **muchos de los casos que se han presentado a lo largo de los años tuvieron la oportunidad de haberse prevenido de manera oportuna pero que, debido a la falta de acompañamiento que suele evidenciarse por parte de las entidades competentes hacia los líderes y lideresas de la comunidad, no se manejan de manera eficiente para lograr su control.** Por todo lo anterior, junto con la participación de otros líderes sociales, se comentó la importancia de los procesos de prevención en el manejo y acompañamiento de las víctimas de la violencia.

□ Se otorgó la palabra a la lideresa María Eugenia González quien manifestó que **desde hace varios años es evidente la presencia de una barrera entre los líderes y lideresas de la comunidad y las entidades garantes de sus derechos de seguridad haciendo principal énfasis, en la policía y el ejército.** Manifestó que dicha barrera es la que ha dificultado en gran medida el avance efectivo de los planes generados para la comunidad por lo que hace énfasis en la importancia del trabajo coordinado de las partes.

Asimismo, la señora María Eugenia dijo que, **la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas vulnerables no se encuentra únicamente a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) sino que es el territorio el que debe intervenir en muchos de los casos.** Hace referencia a la situación actual, el liderazgo que muchos de ellos suelen desarrollar en las comunidades, tiende a afectar de manera directa a las pandillas o a los diferentes grupos que quieren desencadenar, de una forma u otra, un proceso de poder en los territorios. **Es por esto que, manifestó lo importante que es conocer de manera verídica y eficaz las competencias de cada una de las entidades responsables con el fin de lograr un adecuado manejo de dichas situaciones.**

En respuesta a esta intervención, el secretario Carlos Alberto Rojas Cruz expuso que se tendrá en cuenta lo manifestado por la lideresa por lo que es de vital importancia la formación de una mesa interna que permita tener máxima claridad sobre rutas, procesos, protocolos y procedimientos que serán manejados de manera eficaz en una próxima reunión. (...)

La Personera Esther Inés Romero, continua diciendo, “que llama la atención y como lo manifestaron los líderes, que debido a la pandemia se han quedado sin recursos porque la Política Pública en el tema de empleabilidad no es efectiva, no genera un impacto en las víctimas de Santiago de Cali y es aquí donde el Ministerio Público hace un llamado, se sabe que se pasa por momentos difíciles y que esto nadie lo



esperaba, es un ejercicio del cual se está aprendiendo a vivir con el virus pero no por esto se debe dejar descuidada esta población tan vulnerable. Se sabe que algunos de ellos han logrado alguna estabilidad, pero otros están sumidos en la pobreza.” (...)

Con referencia al concepto de seguridad, se llevan dos años en la comisión, en el Subcomité y cuatro años con la administradora pasada tratando de obtener el concepto de seguridad por parte de la fuerza pública y se ha logrado. Como representante del Ministerio Público se solicita que realicen los procedimientos que sean necesarios para lograr obtener ese concepto de seguridad para la ciudad de Cali.

En referencia con las alertas tempranas revisadas de la Defensoría se encuentran las comunas 14 y 15 pero no se ha visto una revisión de esas alertas desde el 2018, la última revisión de la administración distrital fue en el año 2018. En este aspecto se solicita por parte de la administración se realice una revisión y unos avances en referencia a estas alertas tempranas para evitar tantas muertes de niñas, niños y jóvenes en estas comunas (Subrayado y resaltado propio.)

2.2.8. En acta de inspección a lugares –FPJ-9 de Policía Judicial (Santiago de Cali) de fecha 12 de agosto de 2020 se consignó:

2.2.9. En acta de inspección técnica a cadáver –FPJ-10 de Policía Judicial (Santiago de Cali) de fecha 11 de agosto de 2020 del proceso judicial con número de noticia criminal 760016000193202006645 se consignó lo que se relaciona a continuación, para efectos de brindar mayor claridad se informa que el menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.) fue identificado como víctima número 1**

2.2.10. En el informe de investigador de laboratorio –FPJ-13 de Policía Judicial (Santiago de Cali) de fecha 27 de agosto de 2020 del proceso judicial con número de noticia criminal 760016000193202006645 se registró:

2.2.13. En el informe de investigador de campo –FPJ-11 de fecha 12 de agosto de 2020 se consignó

2.2.14. En la declaración jurada –FPJ-15 de fecha 26 de agosto de 2020 se consignó lo siguiente:

2.2.15. El Distrito de Santiago de Cali en respuesta a derecho de petición incoado por el suscrito apoderado judicial, informó



2.2.16. Por su parte, el canal digital Bluradio.com publicó el día 29 de agosto de 2020 el artículo denominado: **“No dan razón de empresa que contrató a vigilantes vinculados en masacre de Llano Verde³⁵”**. (...)

*Hace algunos días se conoció el asesinato de cinco jóvenes en Cali, situación que generó una rápida investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, que ordenó la captura de tres vigilantes que, al parecer, **serían quienes cometieron los hechos mientras cumplían con sus labores en un terreno del sector de Llano Verde.***

*Los hombres vinculados al proceso habrían manifestado que fueron contratados, informalmente, **para cuidar la zona donde aparecieron los jóvenes masacrados.*** (...) Lo anterior constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

2.2.17. El 31 de agosto de 2020 la DEFENSORIA DEL PUEBLO mediante respuesta a derecho de petición incoado por el suscrito apoderado judicial, radicado: 20200060342255681 manifestó:

“La Defensoría del Pueblo es una entidad que forma parte del Ministerio Público, dentro de sus funciones legales y constitucionales contenidas en la ley 24 del /92 debe velar por la defensa, promoción, desarrollo de los Derechos Humanos y del DIH.

*En virtud de lo anterior y ante la solicitud hecha a este despacho, en la cual requieren “2.1. Informe por favor si la Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca denunció o decretó alerta temprana en los términos de lo contemplado en el Decreto 2124 de 20174, de cara a las posibles denuncias de los reclutamientos ilegales en las comunas 14, 15 y 21 del Municipio de Cali. En caso de ser así, por favor expídase copia de toda la documentación referente a la declaratoria de esta alerta temprana. O si se desplegó una actuación similar en caso de no haber actuado en el tenor literal de lo establecido en el Decreto 2124 de 2017, también sírvase aportar copia de esta última”. **Le informamos, que la Defensoría del Pueblo a través de la delegada del Sistema de Alertas Tempranas SAT, ha venido evidencio la situación de riesgo se viene presentando en las comunas del oriente de Cali, información que se ha dado conocer a través de los documentos de advertencia que emite la delegda (Alertas Tempranas).***

Con relación al numeral “2.2. De igual manera se solicita que informe a este apoderado qué actuaciones, trámites o procedimientos ha adelantado con respecto a la situación que actualmente se presenta en el barrio Llano Verde de la ciudad de



*Cali, si ha se puesto en conocimiento de otras autoridades, locales departamentales o nacionales. No solo en lo que respecta a las denuncias por posibles reclutamientos ilegales, sino también lo corresponde a cualquier tipo manifestación violenta o de flagelos que atenten contra los derechos humanos de las personas que residen en el barrio Llano Verde de la ciudad de Cali. De igual modo se solicita que especifique desde qué fecha viene adelantando las respectivas actuaciones”. Con relación al punto dos, suscrito en la petición, en el documento de advertencia que se hizo para las comunas 14, 15 y 21 (AT 085-18) **se hicieron las respectivas recomendaciones referente a la seguridad, reclutamiento de menores y demás inversiones que se requieren para la ejecución de las políticas públicas en ese sector de la capital del Valle”.***

2.2.18. El canal digital Vanguardia.com el día viernes 15 de enero de 2021 publicó el artículo denominado: **“Capturan a alias ‘El Mono’, presunto responsable de la masacre de Llano Verde”**³⁶ Gabriel Bejarano, alias ‘El Mono’, presunto autor material de la masacre de Llano Verde, en la que cinco menores de edad fueron asesinados, fue capturado en la madrugada de este viernes.

La captura ha sido notificada por autoridades locales, sin embargo, será oficializada en el transcurso de este viernes por el Gobierno Nacional en Cali

En el crimen ocurrido el 11 de agosto de 2020 fueron asesinados Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean jair Cruz, Luis Fernando Montaña y Léider Cárdenas.

De acuerdo a una fuente de la Policía, Bejarano se encontraba en una finca ubicada en zona rural del municipio de Obando, norte del Valle.

Al parecer, un ciudadano reconoció a alias ‘El Mono’ y este habría puesto esta información en conocimiento de las autoridades, quienes procedieron a realizar la captura.

Es preciso señalar que el pasado 28 de agosto las autoridades capturaron Jefferson Marcial Angulo y Juan Carlos Loaiza, supuestos cómplices de la masacre, quienes señalaron a Gabriel Bejarano como el autor material e intelectual del crimen. La investigación arrojó que Bejarano, alias ‘El Mono’, fue quien supuestamente disparó cinco tiros de un revólver calibre 38 contra los jóvenes. (...)

El segundo era vigilante de la empresa Control Interno y Transporte, subcontratada para cuidar las máquinas y acompañar a los ingenieros de estas obras, ubicadas junto a la finca donde hallaron los cadáveres.



Bejarano, por su parte, no tenía un empleo formal. A veces trabajaba como vigilante para Control Interno y Transporte. Él recomendó a Loaiza para su actual cargo en esa empresa. Sobre Bejarano confluyen dos estructuras delincuenciales: una red de invasores de tierra y otra de tráfico de armas.

Sin embargo, la hipótesis que el fiscal Barbosa resaltó tras el múltiple homicidio es simple: en un ataque de intolerancia, Bejarano mató a los menores porque entraron sin permiso al lugar para comer caña. Bejarano, delgado y de baja estatura, es un hombre callado, pero en los barrios Pizamos III, Villaluz y Villa Mercedes, donde vivió varios años, muchos le temen. Angulo y Loaiza también.

Cuando ocurrió la masacre, Bejarano vivía en una habitación del barrio República de Israel, pero su familia ya había vivido en la zona de Pizamos III y en Villa Mercedes. En este sector la Policía lo capturó dos veces por porte ilegal de armas. En 2011 fue detenido con un maletín donde llevaba un revólver 38 con seis cartuchos y una pistola CZ Browning 7,65 con silenciador.

En 2012 lo detuvieron con un revólver 38. Según el reporte, Bejarano opuso resistencia y golpeó a uno de los policías, mientras varias personas del barrio atacaron a los uniformados para evitar la captura”. (Se resalta). Lo anterior constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

2.2.19. Así mismo, la emisora de radio colombiana de programación generalista, propiedad de RCN, a través de su página web rcnradio.com, publicó el 09 de septiembre de 2020 el artículo denominado: **Masacre en Cali: tercer implicado tenía casa por cárcel**³⁷, en Cali, en el cual informaron lo siguiente: “(...) Jhonatan Velásquez, el abogado de los familiares de los cinco menores de edad que fueron víctimas de la masacre en el barrio Llano Verde, oriente de Cali, reveló que **Gabriel Alejandro Bejarano, el tercer sospechoso del crimen, tenía dos sentencias condenatorias en su contra.**

Según la consulta de procesos de la Rama Judicial, en una de las condenas el prófugo fue judicializado el 12 de octubre de 2011 por los delitos de porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas y recibió una pena de 7 años y 10 meses.

“Es una situación bastante grave, apenas el jueves llega la cartilla en la cual se demuestra que este delincuente tenía una medida de prisión domiciliaria desde el año 2016, y desde el año 2016 únicamente fue visitado por el Inpec para verificar que estuviera en su lugar de domicilio en nueve oportunidades, nueve oportunidades en 4 años y lo más grave es que de esas nueve oportunidades en



las que fueron, en dos ocasiones no se encontraba en su lugar de domicilio”, explicó Velásquez.

*Para el apoderado, **en ese momento las autoridades debieron levantar la medida privativa de libertad domiciliaria y expedir orden de captura** contra el hombre, a través de un juez de ejecución de penas.*

*“No se hizo ningún procedimiento y además de no levantar la medida privativa de libertad, **la última vez que se visitó a esta persona en su lugar de domicilio, fue el 9 de agosto del 2019.** El Inpec tiene una obligación legal de conformidad con el Código Penal, y es realizar unas visitas periódicas, ellos incumplieron con esto y es por esta razón que el delincuente pudo cometer estos hechos de sangre que dejó la muerte de estos cinco menores”, explicó el abogado. (...)”.* Lo anterior constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

2.2.20. El día 06 de septiembre 2020 el canal de comunicación denominado: “eltiempo.com.co” publicó la noticia titulada: **Prófugo de la masacre de Cali incumplía casa por cárcel desde hace un año**38, en dicho artículo informó: “(...) Gabriel Alejandro Bejarano, quien presuntamente hizo los disparos que causaron la muerte a cinco adolescentes el pasado 11 de agosto, en un cañaduzal del oriente de la capital del Valle del Cauca, afrontaba dos condenas pero tenía beneficio de detención domiciliaria.

El último día que se le hizo una visita fue hace más de un año y ya no residía en el domicilio registrado, dato que el Inpec siempre supo. Abogados de las víctimas, en el barrio Llano Verde, no entienden por qué estaba libre.

Un análisis de su cartilla biográfica en el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) indica que Bejarano había sido capturado el 18 de abril de 2011.

El 23 de junio de ese año el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado le dictó una condena de 3 años y 3 meses por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

El 3 de diciembre de 2012 el Juzgado 10 Penal del Circuito le aplicó otra condena por 7 años y 10 meses también por porte, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

El 23 de mayo de 2013 le revocan el beneficio de la prisión domiciliaria por el incumplimiento a las obligaciones. Al tener otro proceso y habérsele negado la acumulación jurídica de penas, el 10 de marzo de 2016 dentro del proceso 201200528 se le concedió la prisión domiciliaria.



En la cárcel tuvo dos años calificaciones de buenas conductas y los tres siguientes hasta 2016 se le calificó como ejemplar.

El 8 de enero de 2018, a las 7:03 p. m., la Policía se encontró con que el interno ya no vive en la residencia referida. Sus cambios de domicilio se repitieron. Su proceso estaba a cargo del Juzgado 5 de Ejecución de Penas de Cali. (...)

*En los años de reclusión, a Bejarano se le practicaron nueve visitas por parte del Inpec y la Policía. **El 13 de diciembre de 2017 a los patrulleros policiales se les informó que el procesado hace más de un mes no vivía en el lugar que debería permanecer.***

El 8 de enero de 2018, el reporte policial dice que se les indicó a los uniformados que ya no vivía en la residencia visitada. La situación no fue denunciada ante la Fiscalía como fuga de presos y está pendiente de establecer si se le reportó al Juzgado de Ejecución de Penas.

La última revista fue el 9 de agosto de 2019 y así desde hace 13 meses no se conocía su paradero y ahora es prófugo del múltiple crimen en Llano Verde. (...). Lo anterior constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

2.2.21. También, el canal de comunicación denominado: “eltiempo.com.co” publicó la noticia titulada: **Inpec responde por 'El Mono', sindicado de la masacre de Llano Verde**³⁹ el día 07 de septiembre 2020, indicando: “(...) Una fuente del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec le aseguró a EL TIEMPO **que actuó con base en la ley frente a la situación de Gabriel Alejandro Bejarano**, un hombre de 33 años, condenado, y que gozaba del beneficio de casa por cárcel. Bejarano, conocido con el alias de 'El Mono', está prófugo de la justicia desde el 11 de agosto, sindicado de haber disparado contra cinco adolescentes en la llamada masacre de Llano Verde en Cali.

La fuente señaló que el Inpec realizó el traslado - en dos ocasiones - de Bejarano a su residencia para cumplir en casa por cárcel la condena a 7 años de prisión por tráfico de armas.

Bejarano fue condenado a 3 años y 3 meses de prisión, en junio de 2011, por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En 2013, se le notificó de una segunda condena. De acuerdo con el Inpec, Bejarano recibió por primera vez este beneficio - casa por cárcel - en 2013, medida que le fue revocada ese mismo año por un juez al recibir el reporte del Inpec de que no lo encontraron en la casa.



En el 2016, le vuelven a conceder el beneficio de casa por cárcel a Bejarano, "cosa que no se entiende, ya que tenía el registro de haber incumplido con dicha medida", señaló el funcionario del Inpec.

Señaló el funcionario que no hubo irregularidades en su actuación, porque en 2018 los guardianes que fueron a verificar la situación de Bejarano notificaron que en dos ocasiones no lo encontraron en su casa, en febrero y marzo, "y es a un juez al que le corresponde al recibir nuestro reporte levantar la medida", puntualizó.

De igual forma, señaló que si bien - entre 2016 y 2019 - se realizaron 9 visitas para verificar si Bejarano se encontraba en su lugar de residencia, cifra que parece baja, pero explicó que "en la actualidad hay 73.188 personas con casa por cárcel, y son 12.000 guardianes para las cárceles y para verificar a los del beneficio, es imposible hacer los controles con regularidad".

Dijo que los controles se hacen, pero no con la frecuencia que algunos quisieran, "tenemos a cargo la seguridad de las cárceles", sumado a los controles externos. (...)", lo cual constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

El diario digital el tiempo.com en artículo publicado el 28 de agosto de 2020 y titulado como "Siempre supimos que los culpables eran los vigilantes del cañaduzal: familiares" informó: "(...) El alcalde Jorge Iván Ospina, manifestó que **los detenidos tienen antecedentes judiciales y falta una persona por capturar.**

"Invito a los dueños de este tipo de tierras que cuando paguen vigilancia siempre lo hagan con empresas certificadas porque estos asesinos habían sido contratados para cuidar el cañaduzal. Nadie tiene el derecho a quitarle la vida a un ser humano y menos a los menores de edad que solo ingresaron a comer caña. Esperemos que el peso de la ley les caiga encima", afirmó el mandatario40 (...)". Lo anterior constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

2.2.22. El diario digital rcnradio.com en artículo publicado el 28 de agosto de 2020 y titulado como "Siempre supimos que los culpables eran los vigilantes del cañaduzal: familiares" informó: "(...) El alcalde Jorge Iván Ospina, manifestó que **los detenidos tienen antecedentes judiciales y falta una persona por capturar.**

"Invito a los dueños de este tipo de tierras que cuando paguen vigilancia siempre lo hagan con empresas certificadas porque estos asesinos habían sido contratados para cuidar el cañaduzal. Nadie tiene el derecho a quitarle la vida a un ser humano y menos a los menores de edad que solo ingresaron a comer caña. Esperemos que el peso de la ley les caiga encima", afirmó el mandatario41 (...)". Lo anterior constituye un hecho de notorio y público conocimiento.



2.2.23. El día 03 de septiembre de 2020 el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC en respuesta a derecho de petición interpuesto por el suscrito apoderado judicial, informó y allegó los documentos que se relaciona a continuación:

2.2.24. Por su parte, el canal de comunicación denominado: “caracol.com.co” publicó la noticia titulada: **¿Qué está ocurriendo en Llano Verde al oriente de Cali?**⁴² el día doce (12) de agosto de dos mil veinte (2020), es decir, un día después de que fuese asesinado el menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, reseñando que: “(...) **El barrio Llano Verde, ubicado al oriente de Cali, es azotado por la violencia e inseguridad: reclutamiento de menores, fronteras invisibles, limpieza social, microtráfico y amenazas, son algunas de las situaciones que se presentan en el sector y que preocupan a sus habitantes y a las autoridades**

La comunidad está en alerta máxima, tras lo ocurrido en la noche del martes, donde fueron encontrados en un cañaduzal, los cuerpos sin vida de cinco menores de edad, con señales de heridas de armas blancas en el cuello y tiros de gracia. Una lideresa de Llano Verde asegura que por más llamados atención que realizan a las autoridades, la muerte sigue estando presente en la zona.

“Que sí, que van a estar pendientes, pero la situación sigue, entonces no sé la verdad qué es lo que se hace... las amenazas siguen, la muerte sigue y es muy triste”, dijo la mujer.

Por su parte, el concejal Fernando Tamayo, había denunciado desde el mes de enero, que **bandas delincuenciales estaban obligando a jóvenes de la zona a desplazarse a trabajar en actividades ilícitas y quienes se negaran eran amenazados (...)**

“Es una crónica de una muerte anunciada... lo que pasó definitivamente fue la punta del iceberg, del problema que se vive en el distrito”, expresó el concejal, “sé que no es la solución definitiva, pero es necesaria la presencia permanente del Ejército en algunos sectores de Cali⁴³ (...)”. Lo cual constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

2.2.25. La Personería de Santiago de Cali mediante oficio 210.10.1 rad. 20212100361341 en cumplimiento Fallo de Tutela No. 2021-00231 del 12 de noviembre de 2021 proferido por el Juzgado 2º Administrativo de Pereira. Radicado: 20212450255222 de noviembre 17 de 2021, manifestó: “(...) **3.6 “Dirá si la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas, desde el año 2.018 y en lo que va del año 2.020, relacionada con el orden público del barrio llano verde del municipio de Cali y los llamados de la comunidad solicitando protección; en caso afirmativo, indicara que recomendaciones ha realizado la Defensoría del Pueblo**



para fortalecer la seguridad de la zona y que acciones concretas ha tomado la fiscalía general de la Nación para acatarlas”.

Si bien es cierto, la Procuraduría General de la Nación, es la entidad competente para ejercer como ministerio publico ante las Fiscalías Especializadas. En aras de dar cumplimiento al presente fallo de tutela de primera instancia en el cual se ordena dar respuesta de FONDO a la petición:

*La Defensoría del Pueblo, conforme a su función emitió la alerta temprana 085 de 2015 para las comunas 13, 14 y 15 del Distrito de Santiago de Cali. En cumplimiento al deber funcional, la personería de Santiago de Cali le ha realizado el respectivo seguimiento a esta alerta temprana, **como se puede evidenciar en el acta de reunión de agosto 4 de 2020** denominada “acta de jornada de trabajo con la Mesa de Víctimas y el Dr. Carlos Alberto Rojas Secretario de Seguridad y Justicia, donde **la Personería Distrital de Santiago de Cali le hizo un llamado a la Alcaldía de Santiago de Cali sobre el tema de inseguridad que se estaba presentando en el barrio llano verde ubicado en la comuna 15 de esta ciudad.** De igual manera se anexa acta de reunión consejo de seguridad con la Alcaldía de Cali del 29 de octubre de 2020, donde también intervino la Personería de Cali alertando sobre la situación de inseguridad de familiares de los líderes de la mesa en el del barrio llano verde. Se anexan las referidas actas (...).”*

2.2.26. En la dirección electrónica institucional del Consejo Municipal de Santiago de Cali reposa la publicación electrónica efectuada el día 7 de octubre de 2020 denominada: “Cali debe pasar de la excusa de falta de pie de fuerza a una política contundente contra las estructuras criminales”⁴⁴ en la cual se consignó lo siguiente: “(...) A raíz de los informes presentados por el gobierno distrital en materia de seguridad, el Concejal Roberto Rodríguez Zamudio, volvió a insistir en la necesidad de conocer los avances del proyecto de acuerdo que contiene la política pública que en esa materia reorientará toda la estrategia de inversión para contrarrestar el delito en el Distrito Especial.

“Debemos pasar de la excusa de no tener pie de fuerza, a buscar alternativas de inversión en tecnología, integrar a la institucionalidad alrededor de la política de seguridad ciudadana y enfocar con inteligencia el desmonte de las estructuras criminales que operan en la zona metropolitana y la región, pero que ven a Cali como centro de negocios”, sostiene Roberto Rodríguez Zamudio.

Para Rodríguez Zamudio, la Policía Nacional ha realizado grandes esfuerzos dando captura a criminales reconocidos, pero no es suficiente, por lo que exigió que la Alcaldía de Cali formule la Política Pública de Seguridad y Convivencia con estrategias contundentes y un presupuesto acorde, que permitan



*que tanto Gobierno de Cali y la sociedad civil, coincidan **en la resolución del problema que ya ampliamente está identificado.***

“De no hacerlo continuaremos dando tumbos como ha venido ocurriendo, no podemos olvidar que la pasada administración nos dejó grandes problemas en materia de seguridad; cuatro años con la promesa de constituir la política pública, un presupuesto dilapidado, una sanción en FONSECOM por \$1.260.000 que imposibilitaron acceder a los recursos de tecnología y un salvo conducto para la invasión del espacio público y la propiedad”, advierte el Concejal.

Rodríguez Zamudio recordó “que a 10 meses de esta Administración deberíamos conocer los avances de esa política de seguridad, pero llama la atención que estemos cayendo en la misma conducta del Alcalde Armitage, de festejar por la disminución de unos homicidios con campañas de medios a una ciudad que se encuentra secuestrada por el miedo”.

*El Concejal Roberto Rodríguez Zamudio, **insto al equipo encargado de elaborar la política de seguridad, para que no se queden en el escritorio y vayan a la fuente “para entender lo que está ocurriendo en diferentes sectores como en el asentamiento (...) Llano verde, con presencia de delincuentes y milicias con armas largas que deambulan en las noches generando pánico (...)”***, lo cual constituye un hecho de notorio y de público conocimiento.

2.2.27. El periódico electrónico: “elcolombiano.com” publicó tres días después de que asesinaran a la víctima principal de la presente demanda, la nota de prensa que a continuación se relaciona: **“Zona donde ocurrió la masacre de cinco jóvenes en Cali será militarizada”**⁴⁵ (...) El Ministro de la Defensa Carlos Holmes Trujillo anunció, luego de un consejo de seguridad, que las **zonas aledañas del barrio Llano Verde de Cali, donde se registró una masacre de cinco jóvenes y la explosión de una granada, será militarizada.** (...)”. Tuvieron que ocurrir estos dos atentados terroristas para que el estado volviera sus ojos a Llano Verde, y se concientizara de la magnitud de la problemática social que agobia a esta población, (...)”, lo cual constituye un hecho de notorio y público conocimiento

2.2.28. El diario digital denominado: “elpais.com.co” publicó⁴⁶ el día catorce (14) de agosto de dos mil veinte (2020) lo siguiente: “(...) El jefe de la cartera de Defensa, confirmó que **el sábado 15 de agosto** llegarán a la ciudad cinco funcionarios élite del Gaula para apoyar la investigación, cinco investigadores élite de la Dijín, diez de inteligencia y 50 investigadores de la Policía Nacional. Adicionalmente, ratificó la llegada de 180 hombres de las Fuerzas Militares, **que harán presencia en el sector de manare permanente** (...)”, lo cual constituye un hecho de notorio y público conocimiento.



2.2.29. El diario digital denominado: “www.eltiempo.com.co” publicó⁴⁷ el día catorce (14) de agosto de dos mil veinte (2020) lo siguiente: “(...) En Llano Verde viven familias en situación de desplazamiento por el conflicto armado, de reinsertados y de reubicados de zonas de riesgos de inundación en el jarillón del río Cauca. (...) Es un barrio marginal que colinda con cientos de hectáreas de cañaduzales dentro de los llamados ejidos de Cali, terrenos que en la época de la Corona Española fueron utilizados para que la servidumbre y para que la población pudiera tener actividades de esparcimiento. (...) **El arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, indicó que este habría sido un genocidio generacional contra jóvenes que en su miseria y pobreza no cuentan con oportunidades de desarrollo y señaló que las autoridades deben detener a los 'escuadrones de la muerte'.** (...) La Policía y el Ejército informaron en un comienzo, que la masacre habría sido por grupos armados ilegales asociados a fuerzas del narcotráfico. (...) Tras tres casi tres semanas sin recibir información al respecto, la población en Llano Verde exigió respuestas, al tiempo que algunas familias denunciaron amenazas en su contra (...)”, lo cual constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

2.2.30. El diario electrónico denominado: “noticiasrcn.com” publicó el día 1º de septiembre de 2020 lo siguiente: ***"La Defensoría del Pueblo alzará su voz, no nos callaremos. Van a tener que oírnos⁴⁸"***: Carlos Camargo. *El nuevo defensor del Pueblo manifestó su compromiso con la mejora del Sistema de Alertas tempranas, y señaló la importancia de desarrollar su gestión desde los territorios para acompañar a las comunidades que lo necesitan. (...) En su intervención, el nuevo defensor del Pueblo pidió un minuto de silencio por las víctimas de las recientes masacres que han azotado al país, y llamó a las demás autoridades a “no permitir que se ensañen contra nuestros jóvenes”. Se refirió a las capturas de los culpables de la masacre de Llano Verde, y pidió la misma contundencia en todos los hechos violentos (...). (Resaltado propio). (...)*”, lo cual constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

2.2.31. El canal de comunicación denominado: “eltiempo.com.co” publicó la noticia titulada: **El misterio sin resolver de la tortura y masacre de cinco niños en Cali⁴⁹** el día once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021), es decir, un año después de que fuese asesinado el menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, informando que: “(...) **El sol pegaba punzante sobre Llano Verde. En uno de los pasadizos de la calle con pequeñas viviendas en ladrillo a lado y lado, y donde habitan el hambre y los esfuerzos, el papá de Álvaro Caicedo arreglaba una moto para ganarse unos cuantos pesos.**



Vio alejarse a su hijo, con su mismo nombre de pila, rumbo a las casas de sus amigos Jossmar Jean Paul Cruz y Léider Cárdenas.

*Álvarito, de 14 años, como le decía el papá, caminó frente a la cancha de fútbol que siempre le inspiró su pasión por el balón, al igual que a Léider y a muchos de los chiquillos en Llano Verde, en pantalones cortos y chanclas por un calor sofocante y por la escasez en este rincón olvidado de **Cali**. Allí, los sueños de progresar, estudiar una carrera universitaria o de tener empleo se quedan en eso, en sueños. Después de una cuadra desde su casa, Álvarito dobló a la derecha para tomar la estrecha calle donde vivían Léider y Jean Paul. Él era el mayor de los cinco, con 16 años. Al grupo se les unieron **Jair Andrés Cortés**, compañero de colegio de Álvaro, y **Luis Fernando Montaño**.*

*No sospechaban que la muerte los aguardaba en esa mañana del 11 de agosto de 2020, en el aledaño cañaduzal de la **hacienda Las Flores**, un extenso terreno cuyos dueños lo tienen en alquiler. (...)*

Mientras el padre de Álvaro le dejaba el almuerzo listo a su hijo y se iba al rebusque, los menores estaban comiendo caña en ese lugar, distante de sus viviendas donde nadie los podía escuchar, si hubieran llegado a gritar con todas sus fuerzas. Habían llevado cuchillos para coger la caña y mascarla, a unos pasos de una especie de laguna, donde solían mitigar el sofoco, como en otras ocasiones lo hicieron. (...)
Tres hombres se comunicaban por radioteléfonos, cuando empezaron a perseguir a los adolescentes, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía.

*“Ya lo atrapé”, dijo uno de ellos. Su interlocutor le respondió: “Téngalo ahí, ya voy subiendo” y otro dijo: **“Estoy persiguiendo a otro”**. Uno de los hombres se movilizaba en moto. Eran tres voces masculinas, como consta en declaraciones dentro de los procesos judiciales.*

*De acuerdo con la Fiscalía, los menores fueron rodeados, obligados a hincarse en tierra hasta someterlos con sus rostros hacia el suelo y las manos arriba. No tenían sus camisas puestas. **Luego retumbaron los disparos.** (...)*

Las víctimas recibieron tiros de gracia y quedaron tendidas boca abajo. Léider, a unos pasos de Luis Fernando. Más alejados estaban Jean Paul y el pequeño Álvaro, que tenía grandes cortadas. Una, en el cuello y otra, en la nariz. Luis Fernando también tenía una herida en cuello, al parecer, causada por un arma cortopunzante. Tras el asesinato, los cinco cadáveres quedaron toda la tarde en el cañal con ese sol inclemente sobre sus espaldas. Allí también quedaron los cuchillos que habían llevado para comer caña. (...)



Don Álvaro volvió a su vivienda y la comida para su hijo seguía intacta en una olla. Supuso que no había regresado y ya eran las 5 de la tarde de ese martes. **“En mi corazón sentí algo raro”**, cuenta este padre adolorido, oriundo de **Caquetá** como lo era su hijo. Ambos arribaron a Llano Verde, desplazados por la violencia, en 2017. El padre, confundido salió hacia la casa de los Cárdenas, preguntando por Álvaro. Tampoco estaba Léider. Anohecía. El corazón le latió más fuerte y rápido, y el presentimiento creció. Podía estar en el cañaduzal.

“Vimos unas luces. Era como si se estuvieran haciendo señas y luego las apagaron. Después llegaron policías, pero hablaron pocos minutos con unos vigilantes. No se quedaron y no pareció más raro”, dicen las familias.

Ya era de noche y con una linterna, don Álvaro se abrió paso hasta que encontró a su hijo y lo volteó. Después llegaron Francia y los demás familiares de Léider, Jair y Jean Paul.

En el colegio Llano Verde, donde estudiaron **Jair** y Álvaro, recuerdan a estos muchachos extrovertidos, el primero, en séptimo grado y el segundo, en octavo. Recorrían bulliciosos el segundo piso de las instalaciones hasta llegar a sus salones. “Eran como todo niño de acá de la zona, querían ser futbolistas”, dice Diana Milena Gómez, coordinadora en el plantel. (...)”, lo cual constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

2.2.32. A su vez, la revista digital semana.com, publicó el 11 de junio de 2022 el artículo denominado: **Condenan a otro responsable por masacre de cinco menores de edad en Llano Verde**⁵⁰, en el cual consignaron lo siguiente: “(...) ¿Qué ocurrió en Llano Verde? **SEMANA en su momento obtuvo el interrogatorio de los capturados por este crimen. En esos testimonios relatan cómo abordaron a los jóvenes y atribuyeron la culpa a un tercer implicado, que la Policía identificó como Gabriel Alejandro Bejarano, alias Mono, quien finalmente habría accionado el arma de fuego contra Juan Manuel Montaña, Leyder Cárdenas, Jean Paul Perlaza, Jair Andrés Cortés y Álvaro José Caicedo, todos afrodescendientes entre los 14 y los 15 años.**

Según los documentos que tuvo en su poder SEMANA, los cinco menores fueron vistos por sus agresores a eso de la una de la tarde, caminaban en grupo y tenían algunos cuchillos para cortar trozos de caña y comer.

Esto dijo Juan Carlos Loaiza, uno de los implicados, en el interrogatorio:

- Me llama el mono por radio y me dice que si puedo arrimar un momentico a la guaya (entrada vehicular al cañal), entonces yo cogí mi moto para recogerlo.



Jefferson estaba con el mono, cuando llegué Alejandro estaba detrás de una piedra escondido, entonces **yo fui frenando y él me hizo una seña con la mano derecha para que no arrimara tanto, le pregunté qué pasó y él me dice “allá vienen unos chinos”, yo le digo que son trabajadores y él me dice que no, que estaban robando**, entonces cuando los pelados se van acercando un poco, estaban con unos cuchillos, yo me monté en una montañita para mirar bien quiénes eran los que venían, los pelados voltearon por el cañaduzal.

Alejandro nos dice a Jefferson y a mí, *háganse ustedes por la parte de atrás*. Yo me fui por la izquierda y Jefferson por la derecha, Alejandro se mete por la parte de atrás de la caña, entonces Jefferson les dice: **“muchachos, qué hacen”**. Yo me quedo más atrás y le digo a los muchachos **que suelten los cuchillos; Jefferson se los quita y los tira por el cañaduzal**, yo le dije Alejandro (por radio) *aquí tenemos a los pelados*.

En ese momento me acerco más y les digo que mucho cuidado porque por acá estaban robando mucho, que si se pueden ir, luego le pregunté a uno de ellos cuántos años tenía, **y en ese momento salió Alejandro con la cara tapada con una pañoleta y les dice: “todos al suelo, que miraran al suelo, que no le miraran la cara”**, los menores no opusieron ninguna resistencia para entregar los cuchillos. Cuando les quitan los cuchillos, los muchachos dijeron que iban a coger caña y luego a bañar a un lago, yo me iba arrimar donde Alejandro cuando él detonó la primera bala en la cabeza, yo me cogí mi cabeza y dije Dios mío, salí asustado porque de pronto Alejandro atentaba contra mi vida, yo salí de una, y cuando prendo la moto escuchó dos impactos más y Jefferson también dijo: *Dios mío, qué hizo ese man. Jefferson se fue conmigo, llegamos a las máquinas*.

A los 15 minutos llegó Alejandro preocupado, quitándose la ropa para irse. Él mencionó “por allá pasó algo, como que estaban robando”, lo dijo todo nervioso, entonces sale en su bicicleta y yo me voy detrás de él y le preguntó qué había hecho, y él me levanta la voz y me dice “después hablamos, después hablamos”.

Jefferson Ángulo en su interrogatorio insistió en que los adolescentes no estaban robando -como lo aseguró Alejandro en su momento-, dijo que apenas fueron requeridos, ellos soltaron los cuchillos sin oponer resistencia. Contrario a lo que contó Juan Carlos, Jefferson asegura que él botó las armas blancas solo después de que los cinco menores fueron asesinados.

- Me dice Alejandro, el supuesto escolta que mantenía por allá en esa zona, no sé quién lo haya contratado, solo sé que recibía pagos de ahí, que tiene un porrito,



llegamos a un punto donde hay una guaya (...) vemos un tumulto de gente y él llama a un compañero por radio y le dice que venga que hay unos manes que van a robar. (...) Los muchachos inocentemente, niños que no tenía nada que ver con nada, ni con nadie, se meten al cañaduzal (...)”, lo cual constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

2.2.33. En el escrito de preacuerdo suscrito por Juan Carlos Loaiza Ocampo con la Fiscalía General de la Nación se consignó lo siguiente:

“(...) HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES LLANO VERDE

*En la ciudad de Cali (Valle del Cauca) El día 11 de agosto del año 2020, sector del barrio LLANO VERDE, parte Oriental, donde colinda con unos cañaduzales, Finca las Flores, coordenadas 3 22 59 87 “ N 76 30 11 48 “ O, cuando transcurrían entre las 12:30 y las 13:30 horas, **los menores de edad JAIR ANDRÉS CORTÉS CASTRO, ÁLVARO JOSÉ CAICEDO SILVA, LEIDER CÁRDENAS HURTADO, JOSMAR JEAN PAUL CRUZ PERLAZA Y LUIS FERNANDO MONTAÑO QUIÑONEZ, se encontraban departiendo dentro del cañaduzal suerte número 1, cuando son sorprendidos por los señores GABRIEL ALEJANDRO BEJARANO, JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO y JEFFERSON MARCIAL ÁNGULO QUIÑONEZ, quienes mediando acuerdo previo se asignaron roles, se distribuyeron tareas, se hicieron aportes esenciales que se ejecutaron y consumaron, pues fueron perseguidos, encerrados, sometidos, puesto en condiciones de indefensión al hacerlos arrodillar y ejecutados con arma de fuego, donde el señor JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO, contribuye de manera objetiva a la ejecución de este hecho, ya que se encarga junto con JEFFERSON MARCIAL ANGULO, a dobligar bajo amenazas con arma de fuego la voluntad de los menores, ejecutándose el homicidio, por quien dispara que no fue otro que el señor GABRIEL ALEJANDRO BEJARANO, quien ya fue condenado por estos hechos a la pena de 38 años de prisión. Por lo anterior el ciudadano JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO, se le acuso como coautor de los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO, en concurso homogéneo y sucesivo en cuatro oportunidades más, De acuerdo a los presupuestos del artículo 103, 104 No. 4 y 7, de nuestro ordenamiento penal, en concurso homogéneo y sucesivo, en cuatro oportunidades más, además del concurso heterogéneo con el delito de FABRICACION, TRAFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS PARTES O MUNICIONES. Es importante aclarar que, si bien la imputación y la acusación, se hace partiendo de 400 meses en atención a que por error se tuvo en cuenta la circunstancias presupuestadas en el artículo 119 de nuestro ordenamiento penal, no lo es menos que al analizar de forma cuidadosa el texto de la norma, la misma se aplica para casos de lesiones personales y no para homicidios, lo que implica esta aclaración, señalando además que, como se trata de unos hechos***



donde las víctimas son menores de edad, no tendrían derecho a beneficio alguno, por lo tanto no se aplicaría la ley 890 del 2004, lo que quiere decir que la pena partiría por el homicidio agravado de 25 años de prisión, es decir 300 meses, y respecto del tráfico, fabricación y porte de armas de fuego accesorios o municiones, por la coparticipación criminal, artículo 365, numeral 5, del código penal partiría de 18 años, es decir 216 meses (...).”

2.2.34. En la sentencia de primera instancia (Preacuerdo) No. 010 proferida por el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito Funciones de Conocimiento el día once (11) de marzo de dos mil veintidós (2022) se consignó lo siguiente:

“(…) OBJETO DE LA DECISIÓN

*Procede el Despacho a proferir sentencia condenatoria en contra del ciudadano **JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO** quien viene siendo procesado por los delitos de **HOMICIDIO AGRAVADO EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO, EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES AGRAVADO**, conforme al preacuerdo al que llegó la Fiscalía 4 Especializada de Cali, con el acusado, debidamente asesorado por su defensor y que fuera verificado y aprobado por este Despacho.*

HECHOS

*Tuvieron su ocurrencia el día 11 de agosto de 2020, en inmediaciones de la finca las flores, ubicada en las cercanías al barrio Llano Verde de esta ciudad y a la antigua vía al basurero Navarro, siendo aproximadamente entre las 12:30 y 13:30 horas, de acuerdo a todas las labores de investigación; el aquí implicado **JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO**, en asocio con otras dos personas, quienes mediando acuerdo previo en el que se asignaron roles, y se distribuyeron tareas, hicieron aportes esenciales que se **ejecutaron y consumaron, persiguieron, encerraron, sometieron y asesinaron con arma de fuego, a CINCO MENORES DE EDAD identificados como JAIR ANDRÉS CORTÉS CASTRO, ÁLVARO JOSÉ CAICEDO SILVA, LEIDER CÁRDENAS HURTADO, JOSMAR JEAN PAUL CRUZ PERLAZA y LUIS FERNANDO MONTAÑO QUIÑONEZ**, quienes se encontraban departiendo y perdieron la vida producto de impacto de arma de fuego en sus cabezas*

RESUELVE:

PRIMERO.- CONDENAR al acusado **JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA N° 1.143.969.665**, de condiciones civiles y personales conocidas al interior del presente asunto, como **COAUTOR** penalmente



responsable de la conducta punible de **HOMICIDIO AGRAVADO EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO, Y EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES AGRAVADO**, a la pena principal de **CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO (438) MESES DE PRISIÓN**, de conformidad a los planteamientos expuestos en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO.- CONDENAR a **JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO**, a las penas accesorias de la prohibición para el porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones por un término de quince (15) años y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo de veinte (20) años.

TERCERO.- NEGAR a **JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO**, el subrogado de la suspensión de la ejecución de la pena previsto en el artículo 63 del Código Penal, y la sustitutiva de prisión domiciliaria prevista en los artículos 38 y 38B del Código Penal, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. En consecuencia, debe cumplir su pena de prisión en establecimiento carcelario. A través del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales de esta Capital se procederá a librar los oficios pertinentes para dar cumplimiento a lo aquí dispuesto (...).

2.2.35. En la sentencia de preacuerdo de primera instancia No. 030 proferida por el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito Funciones de Conocimiento el día diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022) se ordenó lo siguiente:

“(...) OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el Despacho a proferir sentencia condenatoria en contra del ciudadano **YEFERSON MARCIAL ANGULO QUIÑONES**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.037'588.271, judicializado por los delitos de **HOMICIDIO AGRAVADO EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO, EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES AGRAVADO**, y que conforme al preacuerdo al que arribaron la Fiscalía 4 Especializado de esta ciudad, con el acusado, debidamente asesorado por su defensor, fuera verificado y aprobado por este Despacho judicial.

HECHOS

Tuvieron su ocurrencia el día 11 de agosto de 2020, en inmediaciones de la finca las flores, ubicada en las cercanías al barrio Llano Verde de esta ciudad y a la antigua vía al basurero Navarro, siendo aproximadamente entre las 12:30 y 13:30 horas, de acuerdo a todas las labores de investigación; el aquí implicado **YEFERSON MARCIAL ANGULO QUIÑONES** en asocio con los señores **JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO** y **GABRIEL ALEJANDRO BEJARANO**, quienes



mediando acuerdo previo en el que se asignaron roles, y se distribuyeron tareas, hicieron aportes esenciales que se **ejecutaron y consumaron, persiguieron, encerraron, sometieron y asesinaron con arma de fuego, a CINCO MENORES DE EDAD identificados como JAIR ANDRÉS CORTÉS CASTRO, ÁLVARO JOSÉ CAICEDO SILVA, LEIDER CÁRDENAS HURTADO, JOSMAR JEAN PAUL CRUZ PERLAZA y LUIS FERNANDO MONTAÑO QUIÑONEZ, quienes se encontraban departiendo y perdieron la vida producto de impacto de arma de fuego en sus cabezas**

RESUELVE:

PRIMERO.- CONDENAR al acusado **YEFERSON MARCIAL ANGULO QUIÑONES, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA N° 1.037'588.271**, de condiciones civiles y personales conocidas al interior del presente asunto, como **AUTOR penalmente responsable de la comisión de las conductas de HOMICIDIO AGRAVADO EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO, Y EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES AGRAVADO, a la pena principal de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO (438) MESES DE PRISIÓN**, de conformidad a los planteamientos expuestos en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO.- CONDENAR a YEFERSON MARCIAL ANGULO QUIÑONES, a las penas accesorias de la prohibición para el porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal impuesta.

TERCERO.- DECLARAR que YEFERSON MARCIAL ANGULO QUIÑONES, no es beneficiario del subrogado de la suspensión de la ejecución de la pena prevista en el artículo 63 del Código Penal, tampoco del sustituto de la prisión domiciliaria prevista en el artículo 38B ibidem, pero si al descuento del tiempo que ha permanecido en detención preventiva. En consecuencia, debe cumplir su pena de prisión en el establecimiento carcelario que para tal efecto dispongan las autoridades del INPEC. A través del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales de esta Capital se procederá a librar los oficios pertinentes para dar cumplimiento a lo aquí dispuesto. (...)."

2.2.36. En el reporte de iniciación –FPJ-1 de Policía Judicial de fecha 11 de agosto de 2020 del proceso judicial con número de noticia criminal 760016000193202006645 se registró:



2.2.37. En acta de inspección a lugares –FPJ-9 de Policía Judicial (Miranda Cauca) de fecha 12 de agosto de 2020 del proceso judicial con número de noticia criminal 760016000193202006645 se registró:

2.2.38. El diario electrónico denominado: “eltiempo.com” publicó el día 16 de noviembre de 2020 lo siguiente: ***“¿Quién los mató?, el clamor que se convirtió en una canción 51”*** *Artistas de la región Pacífica compusieron esta canción sobre la masacre de Llano Verde.*

*Hace casi tres meses, el 11 de agosto, **cinco madres unieron su voz a ese grupo. Cinco niños entre los 14 y 15 años** (Luis Fernando Montaña, Léider Cárdenas, Josmar Jean Paul Cruz, Jair Andrés Cortés y Álvaro José Caicedo), todos con sueños e ilusiones, unos bailarines, otros futbolistas, todos amigos y casi hermanos, fueron masacrados en un cañaduzal de Llano Verde, en Cali.*

Fueron sus madres y padres quienes los encontraron sin vida entre esas plantaciones que son un símbolo de crueldad, pero también de tradición para todo el Valle del Cauca y en general para el Pacífico.

El dolor de esa masacre se convirtió tiempo después en una canción que prolonga ese grito desatendido. *Músicos de la región Pacífica unieron sus voces de dolor a las de esas madres y se preguntan también: ¿Quién los mató?*

*La idea inicial surgió del director de cine chocoano, **Jhonny Hendrix Hinestroza, quien tuvo el deseo de plasmar en un videoclip la indignación y frustración que le causó el asesinato de los cinco jóvenes.** Sin embargo, encontró en la música una puerta mucho más amplia para compartir el sentimiento de pérdida. Con la voz de su sobrino, el cantautor Hendrix, junto a las voces de Nidia Góngora,*

*Alexis Play y Junior Jein, y dirigida musicalmente por Cristhian Salgado, **surgió esta canción que resalta la irresponsabilidad del Estado frente a la violencia** hacia los jóvenes, cuya sangre está en ‘manos ajenas’.*

EL TIEMPO conversó con los artistas sobre los gritos de dolor, de denuncia y racismo, pero también de esperanza... (...)

*Hay una frase en la canción que dice: “El llanto de una madre hace más eco que una bala...” **(N. G):** Yo pienso que gran parte de la memoria histórica se mantiene visible por los gritos de quienes de alguna manera no hemos tenido miedo, miedo de decir, de cantar. Yo soy madre. Las madres damos todo por nuestros hijos porque son parte de nosotras. Una madre que pierde un hijo de una forma tan cruel y violenta como lo perdieron las madres de Llano Verde, las de Soacha y otras tantas madres en Colombia, estoy segura de que pierde el miedo. Después de que*



a uno le maten a un hijo, uno puede decir: 'nada peor me puede pasar'. En medio de ese grito, uno grita verdades y absolutamente todo lo que tenga que gritar porque ya no hay temor. Nosotras como madres somos las que estamos pariendo a los hijos que son víctimas pero también a los que son victimarios (...)

¿Cómo los afectó a ustedes esta masacre? N. G.: Cuando fue el asesinato de los chicos, yo estuve con las familias, estuve en el entierro, en el cementerio, lloré con las mamás, con los hermanitos. Yo viví 15 años en Ciudad Córdoba, el barrio que queda al lado de Llano Verde. En ese entonces no existía ese barrio. Pero de alguna manera yo estoy conectada con ellos. Muchos de estos jóvenes vienen del Pacífico, así como llegué yo. Encontramos en esta ciudad un lugar muy distinto al que nosotros estábamos acostumbrados; un lugar donde la familia se entiende de otra forma, donde la vida de comunidad es primordial. Pero llegan estos chicos a la ciudad, salen de sus territorios por la violencia a buscar un supuesto mejor vivir y llegan acá y son rechazados. Es una cruel realidad. Al principio fue impactante porque la canción es cruda y habla de manera contundente de unos hechos reales. Habla de lo que realmente está sucediendo. Nosotros seguiremos haciendo música con sentido, llevando un mensaje y siendo la voz que cuenta lo que este país se ha negado a aceptar y a visibilizar. Lo anterior constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

2.2.39. El canal digital aquí.today publicó hace dos años⁵² lo siguiente: ¿Quién los mató? La profunda canción dedicada a menores de Llano Verde y otras víctimas de masacres

El dolor, las preguntas sin responder, la incertidumbre, el adiós que no se dio, el sinsabor que queda, fueron algunas de las razones que llevaron a un grupo de artistas del Pacífico a escribir una canción que reuniera todo aquello que Colombia quiere decir en medio de esta guerra silenciosa. La misma que le está arrebatando la vida a jóvenes inocentes, como los de Llano Verde o los de Samaniego. ¿Quién los mató?

*Esa pregunta que ronda en la cabeza de las madres que los vieron salir de sus casas, pero no regresar, es la misma que carcomió el corazón de **Hendrix**, nuevo artista emergente del Valle del Cauca; **Cristhian Salgado**, productor musical; los cantantes **Junior Jein**, **Nidia Góngora** y **Alexis Play**; y el director y productor de cine **Jhonny Hendrix Hinestroza**.*

A todos los unió el mismo sentir de impotencia ante el asesinato de cinco menores de edad el pasado 11 de agosto en un cañaduzal del oriente de Cali y juntos hicieron un homenaje a la memoria de ellos y de otras víctimas de masacres en el país.



Aquí Today habló con dos de los autores de esta canción: Junior Jein y Cristhian Salgado, quienes dieron detalles de esta catarsis emocional que los llevó a crear **el himno de las familias que hoy claman justicia por aquellos que no llegaron a la hora de la cena.**

¿Qué es realmente ‘Quién los mató’? Cuesta pensar que es solo una canción que salió del dolor, es mucho más

Junior Jein (JJ): Es una historia, es resistencia, es el clamor de una mamá, es un grito que pide justicia, es Colombia pidiendo explicaciones, rechazando el olvido, es todo lo que se quiso decir en ese momento.

De ahí nació, de que todos teníamos algo que decir respecto al asesinato de los jóvenes en Llano Verde, sin dejar de lado todas las demás masacres que han ocurrido en Colombia, en Samaniego, en Urabá, los falsos positivos de Soacha... Por eso es una pregunta, un interrogatorio en común: ¿Quién los mató? Con rabia, con dolor, con sufrimiento (...), lo cual constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

2.2.40. La canción reseñada puede ser consultada en la siguiente dirección electrónica:

Dicha canción tiene el siguiente extracto:

¿Quién los mató?

*Madre No llegaré a la hora de la cena Aparecí en un lugar Que no era mi hogar
Me duele estar tan lejos Oigo me están llamando*

*Madre No llegaré a la hora de la cena Aparecí en un lugar Que no era mi hogar
Dicen que ven mi cuerpo Oigo me están llorando*

*Volvió el monstruo que acecha El que despoja las tierras Y el que pudre las
cosechas*

*Tiene la mirada fría y carece de empatía Su apetito es insaciable, tiene la panza
vacía*

*No cree en edades, ni dogmas, ni formas, ni normas Destruye lo que vé y no se
conforma Solo obedece intereses económicos Infunde el miedo y entierra a
soldados anónimos*

*Hermanos de otras madres que salieron de sus casas Se fueron hace un día y
hace años que no abrazan Ese monstruo llegó al cañaduzal Quiso azúcar de la
vida y dejó peste con cal*

*¿Por qué ser otro desaparecido? ¿Por qué darlo todo por perdido? ¿Por qué
cambiar mi nombre y apellido? ¿O me quieren pasar por otro falso positivo?*

*Madre No llegaré a la hora de la cena Aparecí en un lugar Que no era mi hogar
Me duele estar tan lejos Oigo me están llamando*



*Madre No llegaré a la hora de la cena Aparecí en un lugar Que no era mi hogar
Dicen que ven mi cuerpo Oigo me están llorando
Hay sangre en la arena y esta vez no es del torero Son cinco chicos que salieron
pero nunca volvieron **Uno de ellos resistió de una manera inexplicable Para
señalar el camino y que lo pudiera encontrar su madre**
En medio de una escena con respuestas en potencia Y unos cuántos que no se
entendía que hacían allí El dolor de familiares impulsados por el miedo Queriendo
llevar sus hijos sin saber si podrían salir
Con vida a contarle al mundo lo ya sucedido Si esta madre no se atreve todo
estaría perdido Y estaría en archivo y otra historia pa' contar Del país con la clase
obrero que se muere en la impunidad
Sangre Hay sangre en unas manos ajenas Si me convierto en canción Solo
recuérdame feliz Aquí no pasa el tiempo No hay pena o sufrimiento
Ahora soy yo quien va a escandalizarse Con la fuerza de los gritos de Ruby Cortes
en los cañaduzales Le exijo a la justicia que este caso se aclare Y que no quede
impune como casi siempre hacen Nada, la vida de los negros no importa nada Lo
primero que dicen es: "andaban en cosas raras" Como Jean Paul, Jair, Léyder,
Álvaro y Fernando **Somos víctimas del sistema y el abandono del estado** Pero
el pueblo no se rinde carajo*

*¿Quién los mató? ¿Quién interrumpió sus sueños?, eso no era justo, no (¿quién
los mató?) Eran universitarios los de Samaniego*

2.2.41. Los hechos que anteceden, esto es, el vil asesinato del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)** cometido el día once (11) de agosto de dos mil veinte (2020), causó un daño a su grupo familiar, el cual debe ser calificado como antijurídico a la luz del artículo 90 Superior, lo cual determina la consecuente obligación para el Estado de resarcir los perjuicios causados a estos, a través de la entidad demandada.

Por todo lo anterior, **La Nación Colombiana – Ministerio De Defensa Nacional – Policía Nacional –PONAL, el Distrito de Santiago Cali / Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, y La Nación Colombiana – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** se consideran administrativa y patrimonialmente responsables de los perjuicios generados a la familia de la víctima, esto es, del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, toda vez que, las entidades públicas en cita a pesar de ser garantes de su seguridad, actuaron de forma omisiva frente a sus deberes legales y constitucionales a sabiendas de la situación crítica de violencia que se vivenciaba en el barrio Llano Verde de Cali para la época de los hechos; situación que demandaba acciones contundentes en materia de seguridad ciudadana, más las mismas no se tomaron, y las actuaciones que si se



emprendieron no fueron a todas luces suficientes para evitar la configuración del hecho dañoso plurimentado.

2.2.42. La omisión de los deberes constitucionales, legales y misionales de las entidades aquí demandadas, en especial lo atinente a la omisión de sus deberes de protección, causó a mis mandantes un daño que deberá catalogarse como antijurídico y por esa razón los perjuicios que causaron deberán ser resarcidos en acatamiento a los dispuesto en el artículo 90 Constitucional.

2.2.43. El 09 de agosto de 2022, fue radicada la solicitud de conciliación extrajudicial ante los Procuradores Judiciales para Asuntos Administrativos de Bogotá / D.C.53

2.2.44. El 27 de octubre de 2022, se instaló la audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 85 Judicial I para Asuntos Administrativos de Bogotá / D.C.; dicha diligencia fue declarada fallida por parte del Ministerio Público a causa de la falta de ánimo conciliatorio de las entidades públicas; por esa razón profirió constancia de no acuerdo, quedando así surtido el requisito de procedibilidad para acceder ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a la luz de lo normado en los artículos 35 y 37 de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo establecido en el artículo 161 del CPACA.

2.2.45. El daño que el Estado, a través de las entidades demandadas en cita, le ocasionó a los demandantes debe ser calificado como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación para el Estado de resarcir los daños y perjuicios causados a quienes ostentan la legitimación en la causa por activa.

Con el fin de agotar el requisito de procedibilidad la parte actora radicó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría Delegada Judicial de Cali, en la que se radicó la solicitud, cuya audiencia se realizó el 27 de octubre de 2022, la cual fue declarada fallida y se expidió la respectiva certificación.

Como quiera que el menor L.C.H (Q.E.P.D) fue asesinado el 11 de agosto de 2020 en la masacre del Barrio de Llano Verde al oriente de la ciudad de Cali en la Vereda la parte actora considera que la Rama Judicial por las presuntas omisiones en las que incurrió el Juez Quinto (05) de Ejecución de Penas en la coordinación de la ejecución de la condena impuesta en un proceso penal anterior contra el señor Gabriel Alejandro Bejarano Bejarano, por no controlar en forma adecuada la detención domiciliaria concedida, dió lugar a que el señor Bejarano Bejarano participara y accionara el arma para cegar la vida a los cinco (5) menores, entre ellos el menor LC:H, por lo que el apoderado de la parte actora considera que se le han causado perjuicios materiales, morales, a la vida de relación, a los derechos



constitucionalmente amparados, los cuales estiman en a la suma de \$3.410'400.00.oo

4.- RAZONES DE LA DEFENSA DE LA RAMA

Como quiera que, a juicio del apoderado de la parte actora, considera en este caso que la Rama Judicial tiene responsabilidad en esta masacre ocurrida el 11 de agosto de 2020, por las presuntas omisiones en las que incurrió el Juez Quinto (5) de Ejecución de Penas de Cali, cuando el señor GABRIEL ALEJANDRO BEJARANO BEJARANO, quien según lo afirma fue quien disparó el arma de fuego en situación de indefensión de los menores, por cuanto al señor Bejarano Bejarano el Juzgado 5 de Ejecución de Penas de Cali en proceso anterior a este en el que fue condenado también por porte ilegal de armas, le concedió de manera irregular el subrogado de la prisión domiciliaria y como la Rama Judicial a través del Juez de Ejecución de Penas no realizó un adecuado control del condenado mediante visitas domiciliarias de vigilancia electrónica, aprovechó esta oportunidad y salió de su casa y participo en esta masacre accionando el arma de fuego que cegó la vida a los cinco (5) menores: **Luis Fernando Montaña Quiñonez**, Álvaro José Caicedo Silva, Leyder Cárdenas Hurtado, Josimar Jeanpaúl Cruz Perlaza y Jairo Andrés Cortés Mina. En este proceso fueron procesados y condenados los señores: YEFERSON MARCIAL ANGULO QUIÑONES, JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO y GABRIEL ALEJANDRO BEJARANO.

El apoderado de la parte actora aduce en la demanda que, dentro de las funciones asignadas a la Rama Judicial el artículo 5 de la Ley 1709 de 2014, Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones, en su artículo 7ª dispuso: **Artículo 5º.** Adiciónese un artículo 7A en la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

“Artículo 7A. Obligaciones especiales de los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad. Los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad tienen el deber de vigilar las condiciones de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad impuesta en la sentencia condenatoria.

Se destaca que como quiera que se cuestionan en su conjunto las decisiones adoptadas por el Juzgado 5 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, no se precisa una decisión, por lo que es preciso realizar una análisis respecto al erro judicial.

Al respecto es necesario precisar que en ejercicio de esta función de vigilar las condiciones de ejecución, como lo ha decantado la jurisprudencia, corresponde al Juez de Ejecución de Penas, adoptar decisiones a solicitudes de parte o de oficio, relacionadas con: la acumulación jurídica de las penas, solicitudes de libertad



condicional, solicitudes de redención de la pena, sustitución del cumplimiento de la pena intramural a domiciliaria, cambio de domicilio del condenado, solicitudes de desglose de documentos, autorizaciones para que el condenado pueda trabajar, revocatorias del beneficio de la detención domiciliaria, solicitudes de avalar de las actividades intramurales para la reducción de penas, solicitudes de reducción de penas, solicitudes de libertad por pena cumplida, trámite de incidente de sanciones, verificar la indemnización integral de las víctimas, entre otros, más NO la de vigilar físicamente que el condenado se encuentre en su domicilio, cuando se le ha concedido este beneficio, por cuanto dicha labor corresponde al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, o sus delegados como la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, a través de la vigilancia con el dispositivo electrónico.

El Juzgado 5 Penal de Ejecuciones, avocó conocimiento de la condena el 11 de enero de 2013, en la que el señor Gabriel Alejandro Bejarano precisando que en dicha condena fue excluido del delito de lesiones personales y solo acepto cargos por el punible de porte ilegal de armas en el proceso radicado con el No. 76001-60-00-000-2012-00528 del 15 de diciembre de 2014, **por cuanto solo se le encontró portando un revolver** Smit & Wesson calibre 38 especial, con numeración borrada, sin el salvoconducto para su porte, **sin que se deduzcan las circunstancias que rodearon la aprehensión, como lo precisa la sentencia.**

Para desvirtuar el cuestionamiento que el apoderado de la parte actora en este proceso realiza contra las actuaciones del Juez 5 de Ejecución de Penas de Cali, de la revisión de las actuaciones procesales y teniendo en cuenta que los hechos de la masacre de los 5 menores se produjo el **11 de agosto del 2020**, se destaca que, según la cartilla biográfica aportada por el INPEC, contra el señor Bejarano Bejarano, también existieron dos (2), condenas:

1.- La condena impuesta por el Juzgado Segundo (2) Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Cali el 23 de junio de 2011, a una pena de 39 meses, por hechos ocurridos el 17 de abril de 2011, proceso No. 194-2011-01119 NI 8856. Se le concedió el beneficio del cumplimiento de la condena en detención domiciliaria.

2.- La impuesta por el Juzgado Décimo (10) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cali del 3 de diciembre de 2012, por hechos ocurridos el 17 de abril de 2011, por porte ilegal de armas, dentro del radicado 76001-60-00-000-2012-00528-00 NI 18769. Se le impuso condena de 94 meses y 15 días, e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo. No se le concedieron los subrogados penales. Se absuelve al condenado al pago de



perjuicios por todo concepto dado que el bien jurídico protegido es la seguridad jurídica.

Frente a estas dos (2) condenas antes referenciadas, el señor Bejarano Bejarano solicitó al Juez 5 de Ejecución de Penas la acumulación jurídica de las penas y mediante auto del 11 de abril de 2013, el Juez 5 de Ejecución le negó dicha acumulación jurídica solicitada por cuanto por cuanto fue condenada por otro delito, el cual realizó luego de concederle la condena de ejecución domiciliaria, lo que excluyó la posibilidad de acceder a la acumulación. Contra esta decisión no se interpusieron recursos.

Los términos judiciales en este trámite fueron suspendidos por paro judicial entre el 11 de octubre al 12 de noviembre de 2012.

El Juez de Ejecución de Penas referenciado, con auto del 6 de diciembre de 2012 negó además la reducción de la condena impuesta por el Juzgado 2 Penal Especializado de Cali, por cuanto el condenado Gabriel Alejandro reclamó que le debían rebajar la pena al 50% por ser un solo delitos y que solo se la habían rebajado un 12,5%, olvidando que en la sentencia de condena fue debidamente motivada con base en la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 38.285 del 11 de julio de 2012 y la sentencia C-645 de 2012. Contra esta decisión no se interpusieron recursos.

El Juez 5 de Ejecución en el auto anterior que negó la acumulación y con base en los dispuesto en el artículo 477 de la Ley 906 de 2004, en el proceso No. 2022-01119 NI 8856, se ordenó correr traslado, por haber realizado un segundo delito encontrándose disfrutando de la ejecución de la pena en prisión domiciliaria. Se ordena su notificación, sin embargo, se corrió traslado, pero dentro de un proceso que no correspondía. Auto 8 de mayo de 2013. Se realizó el traslado correcto

Con auto del 23 de mayo de 2013, el Juez 5 de Ejecución revocó el beneficio analizó y decidió sobre la posibilidad de revocar la prisión domiciliaria en el proceso en el que fue condenado por el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Cali a una pena de 39 meses de prisión por el punible porte ilegal de armas, en el que se le concedió el subrogado de la prisión domiciliaria.

Verificado por el Juez los requisitos previstos en la artículo 38 del ,CP; pero No ha guardado buena conducta el condenado, por cuanto incumplió injustificadamente con las obligaciones previstas en el artículo 38 del C:P, se revocará la prisión



domiciliaria concedida y en su lugar deberá purgar intra muralmente la pena. Contra esta decisión NO se interpusieron recursos.

El Juzgado 5 de Ejecución de Penas con auto del 15 de diciembre de 2014, dispone oficiar al Centro de Servicios para que oficie al Área Jurídica de la Cárcel de Vistahermosa par que informe por cuenta de que autoridad esta preso el condenado Gabriel Alejandro Bejarano. Se procederá a demás a estudiar la petición del condenado relacionada con la extinción de la pena. (Folio 37 del Cuaderno de Ejecución de Penas. Cúmplase. La Directora del INPEC EPMSCC de Vista hermosa, con oficio 226-0780 del 6 d enero de 205, informando que el condenado se encuentra privado de la libertad desde el 19 de abril de 2011 en este Centro Carcelario al ser condenado por 7 años, 10 meses y 15 días de prisión en le radicado 2012-02628-00. **Anexa 4 folios de la cartilla biográfica.**

Como se observa a folio 44 del Cuaderno de Ejecución de Penas, en la cartilla biográfica suscrita por el Asesor Jurídico CERON ZARATE ANIBAL ALBERTO, además de incluirse las horas laboradas y la calificación de la conducta dentro del penal entre Ejemplar y Buena, NO se indica que el Interno haya incurrido en trasgresiones de NO permanecer en su domicilio en visitas de vigilancia electrónica.

El Juzgado 5 de Ejecución de Penas con auto del 3 de febrero de 2015 solicita se desglose la petición del Interno de SOLICITUD DE EXTINCION DE LA PENA vista a folio 29. Según el Informe secretarial del 6 de febrero de 2015 se hace constar que se desglosa dicha solicitud. Aunado a lo anterior, el INPEC allega copia de la cartilla biográfica del señor Gabriel Alejandro Bejarano, en el acápite XII Programación de visitas domiciliarias, se reportan 3 visitas de control de vigilancia electrónica efectiva, los días 14-06-2012; 29-02-2012 y 15-01-2012 Dragoneante Tulio Palacios Francisco Y Ospina, en el que consigna: SE ENCUENTRA EN SU LUGAR DE DOMICILIO, suscito por el Asesor Jurídico CERON ZARATE ANIBAL ALBERTO. Se allega además Certificación de cómputos por trabajo, estudio enseñanza No. 15589241 del 1 de diciembre de 2013, reportando 348 horas de instrucción y calificación sobresaliente en la enseñanza, suscrita por el Coordinador Jurídico, la Directora del Establecimiento, Dragoneante de Registro y Control y el Subdirector del Establecimiento. Aunado a lo anterior se allega Certificación No. 15612068 del 12 de enero de 2014, de evaluación de sobresaliente en: trabajo, estudio o enseñanza. También se allegan las Certificaciones de calificación de conducta No. 4524800 del 3 de octubre de 2013, ilegible, la Certificación No. 4633020 del 9 de enero de 2014, la Certificación No. 4750337 del 3 de abril de 2014, la Certificación No. 4876354 del 17 de julio de 2014, la Certificación No. 4390947 del 20 de junio de 2013; la Certificación No. 5075361 del 2 de enero de 2015, tosa con calificación de conducta ejemplar.



Con base en la prueba documental anterior, el Juzgado 5 de Ejecución con auto del 27 de mayo de 2015, decide AVALAR LA REDENCION DE LA PENA por actividades intramurales por 1684 horas de enseñanza, que corresponde a 210 días, esto es 7 meses.

Con el oficio sin No. del 15 de julio de 2015, para efectos de que el Juzgado 5 de Ejecución defina lo relacionado con la redención de la penal el Coordinador del Área Jurica del INEPC, Dr. Aníbal Alberto Cerón Zarate del Centro de Reclusión, remite: 1.- Cartilla biográfica, 2.- Certificado de cómputos No. 16003439 con 872 horas de enseñanza y 3.- Certificados de conducta Nos: 5075361 y 6274653 con calificación: ejemplar.

De esta prueba documental se destaca que en la programación de visitas del 14-06-2012, 29.02-2012. y 15-01-2012, el Interno se encontró en el lugar de su residencia.

Con auto del 31 de julio de 2015, el Juzgado 5 de Ejecución analizada la prueba documental allegada por el INPEC, AVALA LA REDENCIÓN DE LA PENA por 872 horas de enseñanza, que corresponden a 109 días, esto es, 3 meses y 19 días.

El Interno Gabriel Alejandro Bejarano con memorial dirigido al Juzgado 5 de Ejecución, radicado el 11 de diciembre de 2015, (sello rojo), solicita la sustitución de la prisión intramural por domiciliaria.

El Juzgado de Ejecución con auto del 15 de enero de 2016, solicita a la Oficina Jurídica de la Cárcel Villahermosa remitan el arraigo familiar del Interno. Se allegó: Declaración Extrajuicio, Registro Civil de nacimiento de su hija, Constancia de vecindad de su señora Madre como Secretaria de Gobierno, Constancia de Vecindad de la Junta de Acción Comunal, Constancia de Vecindad del Párroco de la Parroquia de Santa Luisa de Marillan, Recibo de servicios públicos y firmas de vecinos.

El Interno Gabriel Alejandro Bejarano nuevamente con memorial radicado el 19 de febrero de 2016, allega memorial complementario a la petición de sustitución de prisión intramural por domiciliaria.

Con la prueba documental obrante en el expediente el Juzgado 5 de Ejecución, con auto del 10 de marzo de 2016, decidió:

PRIMERO: Declarar que a esta data el señor Gabriel Alejandro Bejarano ha cumplido la pena entre tiempo físico y redenciones para un total de 69 meses y 11 días.



SEGUNDO: Conceder la sustitución de intramuros a domiciliaria, entre otras.

Se suscribió diligencia de compromiso.

Se destaca que contra la anterior decisión NO se interpusieron recursos.

Con el oficio No. 849 J5EPMS del 10 de mayo de 2016, dirigido a la Dra. YENNY PATRICIA CARBONEL OSPINA, Asesora Jurídica Complejo Carcelario y Penitenciario COJAM de Jamundí – Valle, solicita la remisión de resolución favorable para libertad condicional, carilla biográfica, certificado de conducta y cómputos de estudio /trabajo a favor de Gabriel Alejandro Bejarano, quien ya cumple las 3/5 partes de su condena.

El Interno Gabriel Alejandro Bejarano allega memorial informando que es padre cabaza de familia.

La Empresa Servicios SAS Búho, Seguridad en General Nit No. 900590055-1 manifiesta su deseo de vincular laboralmente a Gabriel Alejandro Bejarano, como Auxiliar de Servicios Varios mediante contrato a término indefinido con un ingreso salarial de \$700.000, anexa la minuta del contrato. Certificado de Cámara de Comercio, el RUT,

Con auto del 25 de agosto de 2015 del Juzgado de Ejecución de Penas estudia la solicitud de permiso para trabajar, la cual, a pesar de los documentos allegados, fue negada por NO contar con el Concepto favorable expedido por la Junta de Evaluación y Tratamiento del Establecimiento Penitenciario que vigila su pena de prisión domiciliaria dentro del INPEC.

Se citó al señor Bejarano para que comparezca a notificarse del auto del 25 de agosto de 2016.

Con memorial del 25 de octubre de 2017 el señor Gabriel Alejandro Bejarano informa al Juzgado el cambio de residencia a la carrera 28D5 No. 113-24Lideres 3, por motivos económicos.

Con auto del 2 de noviembre de 2017 el Juzgado AUTORIZA el cambio de domicilio.

Con oficio del 4 de septiembre de 2020 el Dr. EDGAR ALEXANDERR MINA PÉREZ Director del EPMS- Cali solicita al Juzgado 5 de Ejecución la libertad por pena cumplida del señor Gabriel Alejandro Bejarano Bejarano par los procesos: 2023-



00528 y 2011-01119. Como anexos se allega la Cartilla Biográfica del señor Bejarano Bejarano. (Fecha de generación 04-09-2020).

De esta cartilla biográfica se destaca que el INPEC, en el acápite XIII-I Programación de Visitas Domiciliarias, (folio 170 del expediente Cuaderno de Ejecuciones), página 4 de 5, reporta que

Con el oficio del 16 de septiembre de 2020, por parte del Director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Cali. Villahermosa en el que se informa: que el señor Gabriel Alejandro Bejarano

Mediante auto del 13 de noviembre de 2020, el Juzgado 5 de Ejecución de Penas de Cali, en el proceso radicado No. 2012-00528, procede a resolver sobre la viabilidad o no de revocar el sustituto de la PRISION DOMICILIARIA, recordando que el Juzgado 10 Penal del Circuito con Funciones de conocimiento de Cali mediante sentencia del 3 de diciembre de 2012, condenó al señor Gabriel Alejandro Bejarano Bejarano como autor responsable del punible de fabricación, tráfico y porte de armas, imponiéndole una pena de 94 mes y 15 días de prisión negándole la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el sustituto de prisión domiciliaria.

Con auto del 10 de marzo de 2016 el Despacho le concedió la prisión domiciliaria con base en lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 1709 de 2014.

Atendiendo requerimiento del Juzgado, el INPEC el 16 de septiembre de 2020 en el que su Director informó sobre las visitas realizadas el 23 de abril de 2016, el 30 de junio de 2016 y el 30 de septiembre de 2017 en las que se encontró al señor Bejarano Bejarano en su domicilio.

Con auto del 7 de noviembre de 2017 el Juzgado autorizo el cambio de domicilio para la carrera 28 D 5 No. 113-24 Barrio Lideres III de Cali.

Posteriormente el 13 de diciembre de 2017 y el 8 de enero de 2018 se realizaron nuevas visitas a la carrera 28D 3 No.120 - 46 Barrio Pizamos III de Cali y NO se encontró al condenado en su residencia.

De estas visitas fallidas NO se informó al Despacho encargado de la Ejecución de la Pena porque las Unidades Policiales no tenían conocimiento del cambio de domicilio del señor Gabriel Alejandro Bejarano.



Luego en visitas de vigilancia electrónica realizadas el 15 de febrero de 2016, el 28 de febrero de 2018 y el 9 de agosto de 2018, SI fue encontrado en su domicilio.

En el año 2020 no se realizaron visitas por la pandemia-

El 27 de agosto de 2020 se realizó visita a la carrera 28 D 5 No. 113-24 Barrio Lideres III en Cali y NO se encontró al señor Bejarano Bejarano, fueron atendidos por persona de sexo femenino que no aporta nombra quien manifiesta que el señor Gabriel Alejandro Bejarano nos encuentra en el domicilio.

Luego el 14 de septiembre de 2020 se realizó visita a la carrera 28 D 5 No. 113-24 Barrio Lideres III en Cali y NO se encontró al señor Bejarano Bejarano, fueron atendidos por Gerardo Bejarano, Tío del señor Bejarano Bejarano quine manifestó que hacía 6 meses no vivía allí y se desconoce su paradero.

Por lo anterior, con auto del 28 de septiembre de 2020 con base en lo dispuesto en el artículo 477 del CPP, se le corrió traslado al sentenciado para que justifique las trasgresiones de los días antes referenciados del año 2020.

Transcurrido del término anterior el sentenciado como su defensa guardaron silencio y no presentaron justificación alguna frente al trámite del incidente.

Finalmente con el oficio del 20 de septiembre de 2020 el Director del Centro Penitenciario Villahermosa remitió copia de la denuncia instaurado contra el señor Gabriel Alejandro Bejarano por el delito de FUGA.

En la parte considerativa se precisa lo más relevante así:

Al sentenciado se le concedió la sustitución del beneficio de la prisión intramural según lo dispuesto en la ley 750 de 2002, en armonía con lo dispuesto en el artículo 29 del Código Penitenciario, respecto a la salida de su residencia sin autorización judicial y como quiera que se encuentra acreditado este hecho, verificando que el penado tenía pleno conocimiento de las obligaciones contraídas y en el evento de necesitar su salida debía solicitarlo al Juzgado y luego de realizar un detenido análisis de las visitas realizadas el 13 de diciembre de 2017 y 8 de enero de 2018, se hicieron al primer domicilio, cuando él había reportado su cambio, razón por la cual no se pueden tener en cuenta para la revocatoria del sustituto aludido, toda vez que, por error del penal NO se realizaron las visitas a la nueva dirección reportada por el sentenciado.

En este contexto inicialmente el Juzgado pretendió revocar el sustituto de la prisión domiciliaria al sentenciado, sin embargo, al realizar el Juzgado el análisis del tiempo



descontado de la pena por trabajos de capacitación realizados y buena conducta, se abstendrá de revocar el sustituto de la prisión domiciliaria, por cuanto para la fecha de las transgresiones antes referenciadas el señor GABRIEL ALEJANDRO BEJARANO, ya había cumplido la totalidad de la pena.

Por lo anterior, el Juzgado 5 de Ejecución tenía un total desconocimiento de las transgresiones reportadas y solo se colocaron de presente por el INPEC hasta la presentación de la petición de libertad por pena cumplida radicada por el Director de la Cárcel Vistahermosa, que esta instancia judicial tuvo conocimiento de ellas.

Por lo anterior el Juzgado resolvió abstenerse de revocar el sustituto de la prisión domiciliaria, por cuando para la fecha de las visitas, el señor Bejarano Bejarano ya había cumplido la totalidad de la pena, esto es, el 29 de agosto de 2019.

Recordemos que la masacre de los 5 menores ocurrió el 11 de agosto de 2020 y el cumplimiento total de la pena se consolidó el 29 de agosto de 2019, por lo que para la época de los hechos el señor GABRIEL ALEJANDRO BEJARANO BEJARANO no tenía detención domiciliaria y disfrutaba de plena libertad.

Si en gracia de discusión se pretende derivar al Juzgado 5 de Ejecución alguna responsabilidad, es preciso tener en cuenta que, de todas manera el cumplimiento total de la pena se materializó el 29 de agosto de 2019 y como las visitas se realizaron los días 27 de agosto de 2020 y 14 de septiembre de 2020, ya no tenía sentido su realización, por lo anterior, se destaca que si bien no se reportaron al Juzgado 5 de Ejecución las 2 transgresiones, estas no tenían incidencia en las decisiones que al respecto se adoptaran.

En este contexto la parte actora no acredita que las decisiones adoptadas por el Juzgado 5 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, se encuentran ajustadas a la Constitución y a la Ley, es decir en derecho, por lo que correspondía a la parte actora demostrar que dichas decisiones fueron arbitrarias, caprichosas, proferidas con dolo o ser constitutivas de una vía de hecho, sin que, con las pruebas allegadas con la demanda, acredite las omisiones que se le imputan, lo que desvirtúa la ANTIJURIDICIDAD deprecada, como lo exige la sentencia C - 037 de 1996 y desvirtúa la configuración de un presunto error judicial.

Aunado a lo anterior, es preciso tener en cuenta que la entidad encargada de la vigilancia electrónica de quienes gozan del beneficio de la es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC o su delegada la USPEC y si bien se materializó una omisión por el no reporte oportuno de las visitas de los días 27 de agosto de 2020 y 14 de septiembre de 2020, ya no tenía relevancia jurídica su realización.



Las circunstancias anteriores permiten precisar que la demanda de reparación directa por error judicial tiene una causa y un objeto distinto al proceso en el cual se profirió la decisión contentiva del error.

Ello impone concluir que en el proceso de reparación directa la parte que reclama la indemnización no puede formular su pretensión expresando simplemente las razones de su desacuerdo con la decisión que califica de equivocada, ni puede solicitar simplemente que se hagan las mismas declaraciones y condenas que le fueron negadas en tal proceso. (...).

En esta dirección se ha señalado que la acción de reparación directa por error judicial no puede considerarse como una tercera instancia, porque (i) la demanda se dirige contra la Rama Judicial del Estado en la medida en que la autoridad que ha causado el daño es el Juez que profirió la providencia; (ii) en el proceso no participa la contraparte de la víctima del error judicial, porque la sentencia dictada en ese proceso no puede modificarse, dado que es una decisión que está ejecutoriada y, por ende, hizo tránsito a cosa juzgada.

Aunado a lo anterior, las actuaciones adelantadas por el Juzgado 5 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, no configura vulneración alguna a los derechos fundamentales de la parte demandada y por lo tanto debía continuarse con las diligencias tal y como había sido dispuesto en la sentencia, esto es, la entrega real y material del inmueble.

Siendo así las cosas, las decisiones adoptadas en este caso por el mencionado Juez de Ejecuciones son el resultado de una adecuada valoración probatoria, se encuentran debidamente soportadas en las disposiciones legales que regulan la ejecución de las penas, razonadas y con una adecuada motivación.

Acorde con lo transcrito es evidente que no puede usarse este medio de control para revivir estadios procesales ya ejecutoriados, ni puede emplearse la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo como instrumento para obtener una segunda instancia, por lo que las pretensiones del aquí demandante no están llamadas a prosperar.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia de fecha 29 de julio de 2019, radicado 52001-23-31-000-2009-00257-03(45171), Magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, indicó que *el análisis de las providencias respecto de las cuales se juzga la comisión de error jurisdiccional no puede afectar la cosa juzgada, y que **el proceso contencioso administrativo no constituye una instancia adicional.*** (Negrilla fuera de texto)



En virtud de lo expuesto, las pretensiones de la presente demanda no están llamadas a prosperar, por cuanto las actuaciones adelantadas por el Juzgado 5 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, se ajustaron a la normatividad sustancial y procedimental aplicable y vigente y las labores ejecutadas no contradicen el ejercicio oportuno y eficaz de la administración de Justicia.

PRUEBAS Y PERJUCIOS

La parte actora en el presente caso solicita se reconozcan perjuicios materiales, morales, daño a la salud y por afectación de los derechos convencionales y constitucionalmente amparados por la falla del servicio causada, sin embargo, por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, no hay lugar a su reconocimiento.

Respecto a los perjuicios morales es preciso tener en cuenta que, según reciente sentencia de unificación de Consejo de Estado, en el proceso No. 18001-23-31-01-2006-00178-01, NI (46681), Demandante: José Dídimo Díaz y Otros, del 29 de noviembre 2021, modifica sustancialmente la tasación de dichos perjuicios morales, por cuanto ha definido que la prueba del parentesco no es un indicio suficiente del cual deba inferirse la existencia de una relación estrecha con la persona privada de libertad para presumir los perjuicios morales respecto a los hermanos de la víctima directa. Además, excluye de dicho reconocimiento a los hermanos, tíos y abuelo de la víctima, si estos no se encuentran acreditados.

El Consejo de Estado ha prohibido el doble pago de perjuicio morales y los relacionados con la vida de relación o daño a la salud, como lo establece la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2014, Expediente 26251, Consejero Ponente Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Actor Ana Rita Alarcón, demandado Municipio de Pereira, por cuanto son excluyentes y no acumulativos y no se encuentran acreditados con la historia clínica.

Afectación de los derechos convencionales y constitucionalmente amparados.

Como quiera que la reparación a estos derechos es dispositiva, siempre que se evidencie que el daño fue antijurídico, que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario y que en caso de ordenarse una indemnización excepcional, no esté comprendida dentro de los perjuicios materiales e inmateriales ya reconocidos, para evitar un doble pago y no obstante, estar relacionada con todo abuso o desbordamiento arbitrario del poder público que vulnere los derechos de los asociados y se materialice en daños antijurídicos genera un deber para el Estado de restituir, indemnizar, rehabilitar, satisfacer y adoptar garantías de no repetición,



perjuicio en los que es necesario tener en cuenta la Resolución 60/147 del 21 de marzo de 2006, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, concerniente a los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, la cual ha sido acogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, circunstancia que la vuelve jurídicamente vinculante en el ordenamiento interno, sin embargo, en este caso no tiene aplicación.

Finalmente, con todo respeto me permito expresar que con base en los argumentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, no hay lugar al reconocimiento de los perjuicios reclamados y se niegue la prosperidad de las pretensiones de la presente demanda.

Por lo anterior, con todo respeto me permito expresar que con base en los argumentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, no hay lugar al reconocimiento de los perjuicios reclamados por cuanto no se han acreditado esas condiciones especiales exigidos y comedidamente solicito se niegue la prosperidad de las pretensiones de la presente demanda a favor de la Rama Judicial.

Pruebas de la parte demandada

Respecto a la carga de la prueba el Consejo de Estado, ha expresado:

*“CARGA DE LA PRUEBA - Naturaleza / CARGA DE LA PRUEBA - Regla de conducta del juez / CARGA DE LA PRUEBA - Principio de autorresponsabilidad El concepto de carga de la prueba se convierte en (i) una regla de conducta para el juez, en virtud de la cual se encontrará en condiciones de proferir fallo de fondo incluso cuando falte en el encuadramiento la prueba del hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que debe aplicar y, al mismo tiempo, (ii) en un principio de autorresponsabilidad para las partes, derivado de la actividad probatoria que despliegan en el proceso, pues si bien disponen de libertad para aportar, o no, la prueba de los hechos que las benefician y/o la contraprueba de aquellos que, habiendo siendo acreditados por el adversario en la litis, pueden perjudicarlas, las consecuencias desfavorables derivadas de su eventual inactividad probatoria corren por su cuenta y riesgo. **En otros términos, «no existe un deber de probar, pero el no probar significa en la mayoría de los casos la derrota»; las reglas de la carga de la prueba sirven para establecer cuál de las partes tendrá que soportar el resultado desfavorable derivado de una actividad probatoria o de la falta de alegación o de una alegación incompleta, pues aunque el juez no disponga de todos los hechos cuyo conocimiento hubiera resultado necesario para fallar en uno u otro sentido, la prohibición***



de «non liquet» le obliga a resolver, en todo caso. Es entonces cuando las reglas de la carga de la prueba le indicarán en cabeza de cuál de las partes recaía la obligación de haber acreditado un determinado hecho y, por consiguiente, a quién corresponderá adscribir, en la sentencia, las consecuencias desfavorables derivadas de su no demostración, pues dichas reglas, precisamente, permiten al fallador cumplir con su función de resolver el litigio cuando falta la prueba, sin tener que abstenerse de dirimir, de fondo, la cuestión, para no contrariar, con un pronunciamiento inhibitorio, los principios de economía procesal y de eficacia de la función jurisdiccional. En los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. (Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ Bogotá, D.C., febrero cuatro (04) de dos mil diez (2010) Radicación número: 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720) Actor: ULISES MANUEL JULIO FRANCO Y OTROS Demandado: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU Y OTROS).

NOTA DE RELATORIA: Sobre carga de la prueba”, (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 28 de octubre de 1976, MP. Jorge Valencia Arango; del 30 de junio de 1990, rad. 3510, MP. Antonio J. Irisarri Restrepo y del 16 de 2007, MP. Ruth Stella Correa Palacio; rad. 25000-23-25-000-2002-00025-02(AG)).

7.- ANEXOS

1.- Copia de la Resolución No. 5393 del 16 de agosto de 2017, por medio de la cual el Director Ejecutivo delega la función de Representación Judicial de la Nación - Rama Judicial en la Directora Administrativa de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal y Copia de la Resolución No. 7361 del 3 de noviembre de 2016 mediante la cual se nombra en propiedad a la doctora BELSY YOHANA PUENTES DUARTE como Directora Administrativa de la División de Procesos de la Dirección Ejecutiva de Administración judicial y Acta de posesión del 30 de noviembre de 2016.

8.- NOTIFICACIONES

Ministerio Público: Procurador Judicial 82 Administrativa Dra. Viviana Rocío Aguillón
Mallorca: procjudadm82@procuraduria.gov.co



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

La Nación Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional – PONAL NIT:
900.968.320-1, correo: Notificaciones.Bogota@mindefensa.gov.co
deval.notificacion@policia.gov.co

El Distrito de Santiago Cali / Valle, NIT: 890399011-3, correo:
notificacionesjudiciales@cali.gov.co

Defensoría del Pueblo. NIT: 800186061-1, correo: juridica@defensoria.gov.co

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. correo:
notificaciones@inpec.gov.co

Ministerio de Defensa - Policía Nacional: Carrera 59 No. 26-21 CAN Bogotá.
Email: decun.coman@policia.gov.co, decun.egacheta@policia.gov.co

El apoderado de la parte actora Abogado. Jonatan Velásquez Sepúlveda: carrera
12B No. 8-45 Sector Circunvalar (Pereira - Rda), Teléfonos: (6) 3211812 -
3174364677-3014549829, Correo: notificaciones@legalgroup.com.co

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado:
correo: procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

Las recibiré en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, División de
Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la carrera 7 No. 27-18, Teléfono:
5553939 Extensión 7056. Celular: 320 – 4685184, correo:
jdazat@deaj.ramajudicial.gov.co, o deajnotieaj.ramajudicial.gov.co.

De la Señora Juez,

JESÚS GERARDO DAZA TIMANÁ

C.C. No 10'539.319 de Popayán.

T. No. 43.870 del CSJ.



RESOLUCIÓN No. 5393 16 AGO. 2017

"Por la cual se delega la función de representación judicial y extrajudicial de la Nación – Rama Judicial"

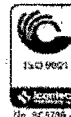
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (E)

En ejercicio de sus atribuciones legales, reglamentarias y estatutarias, especialmente las conferidas por los artículos 209 de la Constitución Política, el artículo 9º al 12 de la Ley 489 de 1998 y el numeral 8 del artículo 99 de la Ley 270 de 1996, y

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 209 de la Constitución Política dispuso que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, a través, entre otros, de la delegación de funciones.
2. En virtud del Art. 9 de la Ley 489 de 1998, los representantes legales de entidades públicas que poseen estructura independiente y autonomía administrativa, podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos conferidos por la ley, en los empleados públicos del nivel directivo o asesor vinculados al organismo.
3. Que el numeral 8º del artículo 99 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, asignó al Director Ejecutivo de Administración Judicial la función de representación judicial de la Nación – Rama Judicial, para lo cual podrá constituir apoderados especiales. Función que se ratifica en los artículos 149 del Código Contencioso Administrativo y 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
4. Que, a su vez, el numeral 7º del artículo 103 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, asignó a los Directores Seccionales de Administración Judicial la función de representación judicial de la Nación – Rama Judicial, en su ámbito territorial, para lo cual podrán constituir apoderados especiales.
5. Que por lo anterior, el Director Ejecutivo de Administración Judicial ejerce la función en mención en el ámbito territorial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas.
6. Que en aras de privilegiar los principios de la función pública de eficacia, economía y celeridad, se hace necesario delegar la función de representación judicial y extrajudicial dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales en que sea parte la Nación – Rama Judicial, que corresponde al Director Ejecutivo de Administración Judicial, citada en el numeral anterior.

En mérito de lo expuesto, el Director Ejecutivo de Administración Judicial.



Hoja No.2 de la Resolución N° 5393 de 16 AGO. 2017 "Por la cual se delega la función de representación judicial y extrajudicial de la Nación – Rama Judicial"

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Delegar en el (la) Director(a) Administrativo(a) de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la función de representación judicial y extrajudicial de la Nación – Rama Judicial ante las autoridades de la Rama Judicial y la Procuraduría General de la Nación, en los procesos o procedimientos en los cuales la Nación – Rama Judicial intervenga como parte o tercero, que se adelanten en la ciudad de Bogotá y en los departamentos de Cundinamarca y Amazonas, facultad que se extiende a toda clase de actuaciones y diligencias que se presenten ante dichas autoridades.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el ejercicio de la función delegada, el (la) funcionario (a) delegado (a) deberá conferir poderes a los abogados de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que ejerzan la defensa de los intereses de la Nación – Rama Judicial en el ámbito territorial mencionado en el numeral anterior, con las facultades previstas en el artículo 77 de Código General del Proceso, inclusive la de conciliar en los precisos términos fijados por el Comité Nacional de Defensa Judicial y Conciliación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, pero no tendrán la facultad de recibir.

ARTÍCULO TERCERO.- Salvo lo dispuesto en el numeral anterior, la disposición de los derechos litigiosos de la Nación – Rama Judicial queda prohibida, sin la autorización previa, escrita y expresa del Director Ejecutivo de Administración Judicial.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Dada en Bogotá D.C., el

16 AGO. 2017

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

HERNANDO DARIO SIERRA PORTO

Elaboró: Betsy Yohana Puentes Duarte – Directora Administrativa - División de Procesos
Revisó y Aprobó: Pedro Julio Gómez Rodríguez – Director Unidad Asistencia Legal



RESOLUCIÓN No. 5393 16 AGO. 2017

"Por la cual se delega la función de representación judicial y extrajudicial de la Nación – Rama Judicial"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (E)

En ejercicio de sus atribuciones legales, reglamentarias y estatutarias, especialmente las conferidas por los artículos 209 de la Constitución Política, el artículo 9º al 12 de la Ley 489 de 1998 y el numeral 8 del artículo 99 de la Ley 270 de 1996, y

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 209 de la Constitución Política dispuso que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, a través, entre otros, de la delegación de funciones.
2. En virtud del Art. 9 de la Ley 489 de 1998, los representantes legales de entidades públicas que poseen estructura independiente y autonomía administrativa, podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos conferidos por la ley, en los empleados públicos del nivel directivo o asesor vinculados al organismo.
3. Que el numeral 8º del artículo 99 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, asignó al Director Ejecutivo de Administración Judicial la función de representación judicial de la Nación – Rama Judicial, para lo cual podrá constituir apoderados especiales. Función que se ratifica en los artículos 149 del Código Contencioso-Administrativo y 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
4. Que, a su vez, el numeral 7º del artículo 103 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, asignó a los Directores Seccionales de Administración Judicial la función de representación judicial de la Nación – Rama Judicial, en su ámbito territorial, para lo cual podrán constituir apoderados especiales.
5. Que por lo anterior, el Director Ejecutivo de Administración Judicial ejerce la función en mención en el ámbito territorial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas.
6. Que en aras de privilegiar los principios de la función pública de eficacia, economía y celeridad, se hace necesario delegar la función de representación judicial y extrajudicial dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales en que sea parte la Nación – Rama Judicial, que corresponde al Director Ejecutivo de Administración Judicial, citada en el numeral anterior.

En mérito de lo expuesto, el Director Ejecutivo de Administración Judicial.



RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Delegar en el (la) Director(a) Administrativo(a) de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la función de representación judicial y extrajudicial de la Nación – Rama Judicial ante las autoridades de la Rama Judicial y la Procuraduría General de la Nación, en los procesos o procedimientos en los cuales la Nación – Rama Judicial intervenga como parte o tercero, que se adelanten en la ciudad de Bogotá y en los departamentos de Cundinamarca y Amazonas, facultad que se extiende a toda clase de actuaciones y diligencias que se presenten ante dichas autoridades.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el ejercicio de la función delegada, el (la) funcionario (a) delegado (a) deberá conferir poderes a los abogados de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que ejerzan la defensa de los intereses de la Nación – Rama Judicial en el ámbito territorial mencionado en el numeral anterior, con las facultades previstas en el artículo 77 de Código General del Proceso, inclusive la de conciliar en los precisos términos fijados por el Comité Nacional de Defensa Judicial y Conciliación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, pero no tendrán la facultad de recibir.

ARTÍCULO TERCERO.- Salvo lo dispuesto en el numeral anterior, la disposición de los derechos litigiosos de la Nación – Rama Judicial queda prohibida, sin la autorización previa, escrita y expresa del Director Ejecutivo de Administración Judicial.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Dada en Bogotá D.C., el

16 AGO. 2017

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNANDO DARÍO SIERRA PORTO

Elaboró: Belsy Yohana Puentes Duarte – Directora Administrativa - División de Procesos
Revisó y Aprobó: Pedro Julio Gómez Rodríguez – Director Unidad Asistencia Legal



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

RESOLUCIÓN NO. 7361 03 NOV. 2016

Por medio de la cual se hace un nombramiento en propiedad.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (E)

En ejercicio de sus facultades legales estatutarias, especialmente las conferidas en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996 y de conformidad con el Acuerdo No.PSAA16-10595 de 2016 proferido por la H. Sala Administrativa

RESUELVE

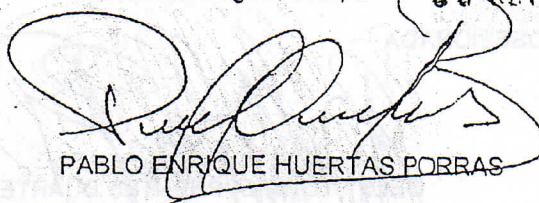
ARTICULO PRIMERO.- Nombrar en propiedad a la doctora BELSY YOHANA PUENTES DUARTE, identificada con la cédula de ciudadanía No.33.368.171, en el cargo de Director Administrativo de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

ARTICULO SEGUNDO- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a

03 NOV. 2016



PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS

Elaboró: LigiaCG
Revisó: RH/Judith Morante García

Calle 72 No. 7 - 96 Conmutador - 3127011 www.ramajudicial.gov.co



No. SC.5780 - 1



No. GP.059 - 1

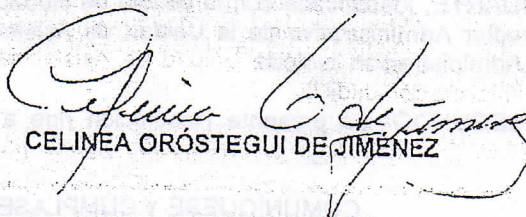


ACTA DE POSESIÓN

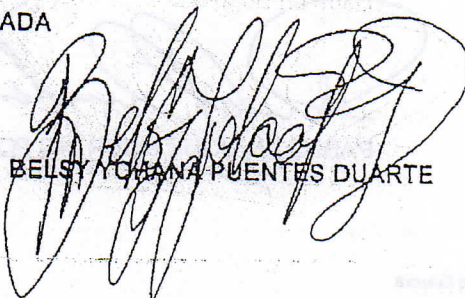
En la ciudad de Bogotá, D. C., a los 30 días del mes de noviembre de 2016, se presentó al Despacho de la Directora Ejecutiva de Administración Judicial la doctora BELSY YOHANA PUENTES DUARTE, identificada con la cédula de ciudadanía No.33.368.171, con el fin de tomar posesión del cargo al cual fue nombrada en propiedad, de Director Administrativo de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Prestó el juramento de rigor ordenado por la Constitución y la Ley.

Con efectos fiscales a partir del 1º de diciembre de 2016.

LA DIRECTORA EJECUTIVA


CELINEA ORÓSTEGUI DE JIMÉNEZ

LA POSESIONADA


BELSY YOHANA PUENTES DUARTE



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

DEAJALO23-5741

Bogotá D.C., 13 de mayo de 2023

Señores
JUZGADO 033 ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
BOGOTA - CUNDINAMARCA

Asunto: Poder al doctor (a): **JESUS GERARDO DAZA TIMANA**
Proceso No. **110013336033202200329-00**
Acción: **REPARACION DIRECTA**
Demandante: **JOHANA CARDENAS HURTADO Y OTROS**
Demandado: **NACIÓN - RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN**
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

BELSY YOHANA PUENTES DUARTE, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá D. C., identificada con cédula de ciudadanía No. 33.368.171 de Tunja, Directora Administrativa de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio de la función de representación judicial y extrajudicial que me fue delegada por el Director Ejecutivo de Administración Judicial mediante Resolución No. 5393 de 16 de agosto de 2017, confiero poder especial, amplio y suficiente al doctor(a) **JESUS GERARDO DAZA TIMANA** abogado(a) de la División de Procesos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 10.539.319 y Tarjeta Profesional No. 43.870, para que asuma la representación y defensa de la Nación – Rama Judicial, en el proceso de la referencia.

El (la) apoderado(a) queda facultado(a) para conciliar, desistir, sustituir, en todas las etapas administrativas y judiciales, así como realizar todo cuanto sea necesario para cumplir debidamente este mandato, exceptuando únicamente la facultad de recibir.

Sírvase reconocerle personería.

BELSY YOHANA PUENTES DUARTE
C. C. No. 33.368.171 de Tunja
Directora Administrativa División de Procesos

Acepto:

JESUS GERARDO DAZA TIMANA
C.C. 10.539.319 de Popayán
T.P. No. 43.870 del C.S. de la J.
jdazat@deaj.ramajudicial.gov.co
deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co

Iniciales de quien elabora: ALGC

Carrera 7 No. 27-18 Tel: 3127011 www.ramajudicial.gov.co



Firmado Por:
Belsy Yohana Puentes Duarte
Directora División De Procesos
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
Unidad Asistencia Legal
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0c718d21e08a7c7d1b686f822fe45bc13c44ce502434ac67a668eba8081262cc**

Documento generado en 16/05/2023 09:36:28 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>